

Consejo editorial

Mauricio García Durán S.J
Luis Guillermo Guerrero
Camilo Borrero
Jorge Julio Mejía
Teófilo Vásquez
Camilo Tamayo

Colaboran en este número

Mauricio García Durán S.J
Teófilo Vásquez
Maria Clara Torres
Martha Cecilia García
Camilo Borrero
Camilo Tamayo
Corporación Nuevo Arco
Iris
Juan Carlos Morales
Javier Lautaro Medina
Silvia Otero
Roberto Llanos

Coordinación editorial

Camilo Borrero
Camilo Tamayo



Proyecto Comunicación y Cultura Cinep

Centro de Investigación y Educación Popular Cinep
Cra 5 No 33^a- 98 Conmutador (571 – 2456181)
Bogotá D.C Colombia
Correo electrónico: revistaciendias@cinpe.org.co

Panorama nublado

Por: Mauricio García Durán S.J. Director de CINEP
direccion@cene.org.co

El presidente Uribe ha cumplido seis años en el poder y si nos atuviéremos a las encuestas de opinión estaríamos gozando del mejor gobierno de toda nuestra vida republicana. Igualmente las presentaciones que realiza el gobierno de su gestión, como la realizada en el IV Congreso de Reconciliación, mostrarían que prácticamente se ha respondido a todos los problemas graves del país. Sin embargo, cuando se mira más allá de la espuma de la opinión pública, nos encontramos que emergen una serie de hechos que nos obligan a preguntarnos críticamente sobre los resultados de la Seguridad Democrática y, aún más, sobre la conveniencia de una nueva reelección.

En un contexto de polarización creciente, como el que vive el país, no es fácil lograr un análisis que haga justicia tanto de los logros y alcances de la presente administración presidencial, como de sus límites y errores. Sin embargo, sigue siendo un reto ofrecer al país análisis que nos permitan acercarnos a la complejidad de la realidad de nuestro país desde miradas diversas. Esa es la pretensión de este número de la revista Cien Días.

La carta de presentación del presidente Uribe son los resultados obtenidos durante su gobierno en el campo de la seguridad. Los golpes contra las FARC en el último semestre han consolidado la apuesta por una salida militar al conflicto armado que vive el país. Es verdad que el gobierno ha logrado un cambio significativo en el balance estratégico de la confrontación con este grupo guerrillero, infringiéndole golpes significativos en el campo militar y un descalabro aún mayor en el campo político. No obstante ello, la completa derrota militar está lejos de producirse. Esto se hace evidente cuando se mira la evolución del conflicto armado y de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Es indiscutible el descenso de los niveles de violencia entre el 2002 y el 2005/06. Sin embargo, los niveles actuales (2007/08) siguen siendo altamente preocupantes ya que en varios de los indicadores están al mismo nivel o por encima de los niveles que tuvo el país en el primer quinquenio de los años noventa, cuando Colombia entró en los estándares internacionales a tener un conflicto armado mayor. Es decir, aunque los logros gubernamentales en seguridad han sido importantes, están lejos de haber resuelto el problema, como lo indican la continuidad del narcotráfico, que alimenta el conflicto, y del fenómeno paramilitar, que no obstante la desmovilización promovida por el gobierno, da claras señales de seguir vivo. A eso se suma el crecimiento en las infracciones al DIH de parte de las Fuerzas Armadas, tendencia creciente en los seis años de la Seguridad Democrática.

El panorama se torna aún más gris cuando se mira la dinámica de la protesta social, indicador importante de la manera como un gobierno está respondiendo a

las demandas de la sociedad, particularmente de los sectores en condiciones sociales más desfavorables. Llama la atención que en los seis años de gobierno de Uribe Vélez la protesta social ha mostrado una tendencia ascendente. Y más preocupante aún es el hecho de que el 60% los motivos de la movilización social corresponden a razones que apuntan con claridad a un malestar social ante una gestión pública que o no responde a sus necesidades, o los perjudica; estos motivos son: contra la violación de derechos, en oposición de políticas públicas y por incumplimiento de pactos. Es significativo, por demás, el peso que motivos relacionados con la dinámica del conflicto armado y las infracciones al DIH tienen en esta movilización. Adicionalmente, es necesario tener presente en este panorama las dificultades para avanzar en la definición concertada de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos; no obstante la disposición oficial inicial de caminar en esa dirección, las organizaciones de la sociedad civil han percibido en muchos momentos del proceso que no cuentan con las garantías adecuadas para su participación en la concertación.

Otra faceta crítica a este nivel tiene que ver con el debate que se ha dado en torno a una eventual crisis alimentaria a nivel mundial y la forma como tal crisis afectaría al país. Aunque el gobierno insiste en que estamos lejos de que dicha situación nos afecte, la política gubernamental hacia el campo parecería indicar lo contrario. Por ejemplo, énfasis en temas como los agrocombustibles, sin que exista igual o mayor preocupación por la economía campesina o por la producción de alimentos, está generando dinámicas cuyo resultado afectará necesariamente a los sectores más vulnerables, es decir, los sectores urbanos más pobres y los desplazados. Más grave aún, se sigue constatando que expansión de algunos de estos proyectos está vinculada al desalojo de comunidades de sus tierras, como se ha presentado en regiones del Chocó, sin que exista una clara política gubernamental para hacer frente a ello.

Finalmente, lo que más nubla el panorama de nuestra democracia son los continuados choques del Presidente de la República con la Corte Suprema de Justicia, que denota una estrategia del Gobierno para restarle poder a la Corte para que no avance en lo de la parapolítica. Ello no sólo implica ignorar la independencia de la que debe gozar el poder judicial, sino más grave aún querer consagrar una democracia que se basa en el recurso a la violencia como forma de apuntalar el poder de los sectores gobernantes en el ámbito local, regional y nacional. De consolidarse una perspectiva así, lo que se pone en juego es una crisis institucional de mayores proporciones para el Estado social y democrático de derecho.

En síntesis, podemos decir que los éxitos de la Seguridad Democrática no logran ocultar los nubarrones que la gestión gubernamental también está generando. Es por ello que el reto que tenemos los colombianos lo podemos expresar usando las palabras de los señores Obispos en la Conferencia de Aparecida: "No puede haber democracia verdadera y estable sin justicia social, sin división real de poderes y sin la vigencia del Estado de derecho" (No. 76).

La encrucijada de las FARC

Por: Teófilo Vásquez. Sociólogo. Investigador de CINEP.
violenciayestado@cinep.org.co

La liberación de Ingrid Betancur y los demás secuestrados fue un hecho importante, que marcó un logro de la Seguridad Democrática del gobierno de Uribe. Pero es un tema que hay que analizar en sus repercusiones hacia el mediano plazo, con el fin de sacarlo de la coyuntura. Este artículo busca cumplir este cometido, desde una perspectiva bien precisa: entender la actual situación de las FARC, así como sus transformaciones militares, políticas y culturales.

Lo militar y lo político a mediano plazo

Los últimos tres gobiernos nacionales han mantenido diferencias y continuidades en su acercamiento a los temas de paz y guerra. En especial, ninguno ha promovido una política estatal de largo aliento. El gobierno de Samper, porque escasamente alcanzaba para sostenerse él mismo. Y del gobierno de Pastrana se criticó el exceso de voluntad política que tuvo con respecto a las FARC, careciendo de un derrotero claro de negociación. Pero hay algo central: fue esta Administración la que empezó con la reingeniería de las Fuerzas Armadas, que se concretó en las primeras fases del Plan Colombia gracias a la ayuda internacional obtenida por lo que él denominó *diplomacia por la paz*.

El gobierno de Uribe, como ningún otro, tiene la voluntad política, militar y jurídica de derrotar las Farc. Uribe ha sido tan exagerado en este aspecto, que llegó a crear muchas tensiones con el estamento militar, pues al comienzo de su mandato, frente a cada acción adversa a la Seguridad Democrática, el Presidente presentaba la cara positiva a los medios de comunicación mientras los militares quedaban como incompetentes, tras las frecuentes destituciones¹. Sin embargo, parece que esta actitud del mandatario de señalar a los militares como chivo expiatorio cada vez que se descubría una falla, cambió con el ingreso al gobierno del ministro Santos, quien da cuenta de cada "positivo" rodeado de toda la cúpula militar. Ese cambio de las relaciones de Uribe con los altos cuerpos castrenses es un factor muy importante para entender la nueva etapa de la Seguridad Democrática, que ya empezó a dar sus frutos.

Por eso, luego de seis años de puesta en marcha esa estrategia, la Operación Jaque no puede ser calificada como un golpe de buena suerte. Ella es resultado de un esfuerzo sostenido que venía realizando el gobierno Uribe en torno a un objetivo claro: la derrota de las Farc.

¹ ver al respecto: VASQUEZ, Teófilo. VILLATE, Camila. URIBE Y LOS MILITARES: De la aquiescencia a los "positivos", en: REVISTA *CIEN DÍAS VISTOS POR CINEP*. No. 59, junio-noviembre de 2006. http://www.cinpe.org.co/ciendias59_articulo03.htm

Los esfuerzos y resultados de esa política se vienen mostrando y en los últimos seis meses se han hecho más evidentes: el golpe militar de marzo al campamento de Raúl Reyes en el Ecuador, la eliminación pagada de Iván Ríos y más recientemente la polémica Operación Jaque, entre otros.

En la actualidad se desarrolla una segunda fase, que es la profundización decidida del Plan Patriota y del Plan Consolidación y que consiste en el asedio a las retaguardias militares de las Farc con el propósito de desvertebrar sus corredores estratégicos y de movilidad². Sus ejecutores saben que, una vez que la guerrilla pierde movilidad, se vuelve muy vulnerable a los golpes contundentes de su enemigo.

Por añadidura, en esta segunda fase se está utilizando intensamente, y con mejores resultados, la inteligencia militar. En el pasado, el Ejército colombiano había carecido de un empleo más intensivo de la inteligencia en la táctica y la estrategia militar. Lo que poseía era a lo sumo una inteligencia encargada de perseguir a las organizaciones que consideraba auxiliadoras de las guerrillas. Ahora es evidente que existe un plan encaminado a golpear al Secretariado de las Farc, en una acción seguramente envolvente que combina la inteligencia humana y la sofisticación tecnológica.

Por eso, luego de seis años de puesta en marcha esa estrategia, la Operación Jaque no puede ser calificada como un golpe de buena suerte. Ella es resultado de un esfuerzo sostenido que venía realizando el gobierno Uribe en torno a un objetivo claro: la derrota de las Farc.

Los avances de la inteligencia de la fuerza pública son producto de las masivas reinsertiones y capturas que se han venido presentando a lo largo de este gobierno. No hay duda de que la información suministrada por desertores y capturados, analizada y sistematizada en función de objetivos bélicos, permite conocer mejor las vulnerabilidades del enemigo y la convierte en un arma letal.

De otro lado, no se debe olvidar que, desde hace mucho tiempo, las Farc estaban derrotadas estratégicamente. Es decir, la posibilidad de que las Farc se tomen el poder por la vía militar era ya imposible de tiempo atrás. Por tanto, faltaba un esfuerzo para neutralizar y hacer retroceder la ventaja que las Farc habían ganado en la transición de los gobiernos de Samper y Pastrana y que se intensificó durante los diálogos de Caguán.

De lo anterior se desprende que las Farc siguen siendo fuertes y con importantes bases sociales en el sur del país, donde tomaron un segundo aire con su inserción en la economía cocalera³. Pero esta guerrilla estaba ya derrotada políticamente, en

² **“Recuperación del control estatal del territorio:** El Gobierno Nacional recuperará gradualmente la presencia estatal y la autoridad de las instituciones, comenzando por aquellas zonas que se consideren estratégicas. Donde sea necesario, el ciclo de recuperación del control del territorio se iniciará con las operaciones que adelanten las unidades de la Fuerza Pública, una vez los organismos de inteligencia del Estado hayan identificado y localizado las amenazas. Estas operaciones recibirán el apoyo de las tropas de refuerzo que se juzgue conveniente” Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República – Ministerio de Defensa, 2003. Pág. 43.

³ Ver al respecto: GONZÁLEZ, Fernán. BOLÍVAR, Ingrid. VÁSQUEZ, Teófilo. En VIOLENCIA POLÍTICA EN COLOMBIA: De la nación fragmentada a la construcción del Estado. CINEP, 2002. Págs. 97-119.

el sentido de que no convoca a franjas ciudadanas importantes que vayan más allá de los tradicionales sectores rurales de colonos, que siempre la han apoyado. Es evidente el quiebre de las Farc con otros sectores que antes los acompañaron, al menos en su discurso y sus fines políticos, como ocurre, por ejemplo, con algunas capas de población urbana radicalizada. A finales de la década del ochenta, y con el derrumbe del socialismo, todo esto hizo agua, y en seguida vino el distanciamiento de amplias zonas de opinión en los años 90 como réplica a la ortodoxia política que expresaban las Farc.

Entonces, pues, puede hablarse de dos derrotas, la militar y la política. El gobierno de Uribe es absolutamente consciente de esa situación y está haciendo un esfuerzo muy grande para que esas derrotas se profundicen y coloquen a las Farc simple y llanamente en un proceso de reinserción jurídica. Y esto a un precio mucho menor que el que debió pagar el Estado por la reinserción del M-19 y el EPL a la vida legal en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente de comienzos de los años 90.

Los aspectos políticos y económicos de la confrontación

No se trata solamente de la ofensiva militar contra las retaguardias bélicas de las Farc, ya que éstas no son solamente militares: también tienen características históricas, sociales y culturales. Romper esta muralla es propinar duros golpes a una historia, a una identidad política y a su capacidad de recreación y reproducción. En ese sentido, el país puede dividirse en dos escenarios, que tienen expresiones territoriales y espaciales distintas. La derrota de las Farc fue un hecho evidente en la costa Caribe, ya que ni siquiera en su mejor momento esta guerrilla avanzó más allá de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y los Montes de María. En la Costa Atlántica las Farc fueron derrotadas por el paramilitarismo, que logró imponerse como proyecto social, económico y político, y posteriormente⁴, en el gobierno de Uribe, estos frentes han recibido nuevos golpes militares.

En contraste, en el sur del país las Farc conservan todavía un gran margen de maniobra, con dos momentos de impulso: los diálogos del Caguán y, más recientemente, su inserción en las economías cocaleras del Andén del Pacífico. Sin embargo, ese margen tiene límites, ya que, mientras la estrategia del gobierno no sea exclusivamente militar sino también política, social y económica, y tenga como objetivo incluir en el mercado nacional e internacional, de manera lícita, grandes porciones del territorio, tal integración de las regiones y del territorio seguirán siendo derrotas tácticas para las Farc.

Por eso, el peor enemigo de las Farc no son solamente las ofensivas militares sino el también el desarrollo legal e incluyente, que les arrebató terreno para reproducir sus bases sociales y políticas. No por casualidad estamos ad portas de una segunda etapa de la Seguridad Democrática, señalada como recuperación social del territorio⁵.

⁴ *Ibíd.* Pág. 116.

⁵ Desde el año 2003, la política de seguridad democrática planteó como estrategia contra las retaguardias estratégicas de los actores armados la consolidación del control estatal del territorio, que viene siendo puesta en práctica a través del Centro de Atención y Acción Integral CCAI con cuatro componentes que pretenden lo que se ha denominado la 'Recuperación Social del Territorio': 1. Mayor control del territorio, 2. Mayor movilidad de los ciudadanos, 3. Mayor presencia del Estado, 4. Mayor provisión de bienes y servicios sociales; los resultados esperados son: Mayor gobernabilidad, mayor legitimidad, mayor credibilidad y mayor confianza. En principio esta estrategia estaría enfocada a 9 zonas del país, compuesta por 53 municipios.

En el terreno político, las Farc son poco flexibles a los cambios, juegan con un guión preconcebido. Siguen empeñadas en su viejo modelo de las "columnas de marcha", que obró en el pasado, y de la colonización armada, que opera en la actualidad. Ambas estrategias consisten en transportar toda su estructura política, militar, social y económica a una zona de retaguardia, y cuando el Ejército y Estado aparecen, la guerrilla no hace otra cosa que reiniciar el proceso.

Por eso, el peor enemigo de las Farc no son solamente las ofensivas militares sino el también el desarrollo legal e incluyente, que les arrebatara terreno para reproducir sus bases sociales y políticas. No por casualidad estamos ad portas de una segunda etapa de la Seguridad Democrática, señalada como recuperación social del territorio.

Esa capacidad de reproducción está llegando a sus límites porque en ese trasegar ya se toparon con las fronteras internacionales. Y entonces hallaron otro problema, frente al cual las fuerzas insurgentes no estaban preparadas políticamente: el grave problema de política internacional creado con el establecimiento de sus retaguardias en Ecuador, Venezuela y Brasil.

Las Farc y la economía cocalera

Las Farc van a seguir reproduciendo sus bases sociales y ampliando la economía de la guerra a través de su capacidad de inserción en los bordes e intersticios de regiones que no se integran efectivamente al mercado legal y la comunidad política nacional. Dinámica que une dos procesos simultáneos: de un lado, el incesante traslado de cultivos de coca, y de otro, la reproducción de su experiencia histórica mediante la colonización armada⁶.

Si bien la inserción en la economía cocalera les representa una ventaja económica y de reproducción social y política local, también limita seriamente su legitimidad ante sectores urbanos del país y la comunidad internacional. Incluso, les genera problemas al interior de su proyecto, ya que lo que presenta como adhesión a sus esquemas ideológicos es realmente una coincidencia temporal de intereses. Tan cierto es lo anterior que, cuando los paramilitares ofrecieron lo mismo, la gente, de igual forma, aceptó las autodefensas.

Las Farc no quieren darse cuenta de que la reproducción social basada en la economía cocalera crea identidades sociales precarias, más sujetas al interés económico que a las identidades e ideales políticos fuertes, que son condición indispensable para un proyecto en cual el sentido discursivo y la retórica política resultan centrales.

Aunque las Farc están contra las cuerdas en lo militar, y a pesar de la precariedad de las bases sociales producto de la economía cocalera, retórica y doctrinariamente

Ver al respecto:

http://www.accionsocial.gov.co/documentos/Boletin_Hechos/feb2008/Bolet%C3%ADn%20Recuperaci%C3%B3n%20Social%20Territorio%20feb-08.pdf

⁶ Entre otros trabajos sobre el tema se puede ver al respecto los textos de: Ramírez, William, (1981) "La guerrilla rural en Colombia: ¿una vía para la colonización armada?", en: Estudios rurales Latinoamericanos, Vol. 4, N°2, Bogotá, Estudios rurales Latinoamericanos y JARAMILLO, Jaime Eduardo. CUBIDES, Fernando y MORA, Leonidas. Colonización, Coca y Guerrilla. Universidad Nacional, 1986

el núcleo básico de las Farc es duro en política. No hay tal contradicción entre dos alas, una política y otra militar. Las Farc son un partido comunista en armas y, en cuanto tal, tienen un credo marxista leninista que se llama centralismo democrático y jefatura colectiva.

En ese sentido esa guerrilla sigue siendo una fuente de identidad política, y por tanto la negociación que muchos analistas anhelan para arribar a la rendición y la entrega no va a ser posible. En el peor de los escenarios para las Farc, va a haber una negociación con el núcleo político que hace parte de la generación de los años 60 y 70 y que asumió recientemente el relevo en la dirección de la organización. Es un equipo que en su mayor parte tiene procedencia urbana, ha hecho estudios universitarios y es portador de previas experiencias políticas legales. A pesar de que puede continuar la entrega de mandos medios y de tropa, esos reveses robustecen más las identidades políticas que reinan en el núcleo duro y doctrinario de las Farc.

En síntesis, los obligados cambios en el Secretariado no implican transformaciones en la manera doctrinal como las Farc piensan y hacen la política. A lo sumo cabe esperar que, en el terreno militar, esta guerrilla se ajuste a la confrontación total que propone el Estado.

Los escenarios posibles de una negociación política

La situación actual está socavando uno de los supuestos básicos de la salida política y negociada del conflicto armado⁷: lo que se ha denominado como empate militar negativo. La estrategia del gobierno es clara: derrota militar para escamotear en la mesa de negociación los temas económicos, sociales y políticos.

Pero el camino no es tan fácil, ya que las Farc, no porque estén derrotadas militarmente escogerán una negociación exclusivamente jurídica. Precisamente por eso, si se quiere una negociación política con las Farc, hay que desplegar grandes esfuerzos, y ellos pasan necesariamente por la ampliación de la democracia local. Hay que volver los ojos a la agenda política que queda en las Farc, que se intentó deslindar de la lucha armada a través de la Unión Patriótica. Por tal razón hay que sentarse a negociar con las Farc como lo que son: unos agentes políticos.

En esa dirección no ayudan los excesos de triunfalismo del Gobierno, empeñado en una entrega y rendición de las FARC. Una negociación basada en la negación de ellas como actor político sólo conduce a exacerbar una cultura política atrapada en actos mutuos de humillación, que se expresan como indignación. Proceso que va creciendo con el desarrollo del conflicto armado, y que el Gobierno motiva con fuerza para mostrar a las FARC simplemente como un grupo terrorista, y por supuesto sin agenda política. Lo que implica reproducir el conflicto ya no militarmente, pero sí social y culturalmente.

⁷ Que indicaba la vía del diálogo y la negociación como ineludible por cuanto que: ni estado podía derrotar a las guerrillas, ni las guerrillas acceder al poder por la vía armada.

El conflicto armado colombiano: ¿el fin del fin?

Por Mauricio García Durán, SJ. Director de CINEP.

direccion@cinep.org.co

No es fácil en las actuales circunstancias de Colombia hacer un balance adecuado sobre cuál es el real estado del conflicto armado en nuestro país. Para muchos puede existir la tentación de dejarse llevar en sus análisis por la euforia de triunfo que embarga al gobierno luego del rescate incruento de los 15 secuestrados, entre ellos Ingrid Betancur. Para otros, por el contrario, se mira con excesivo escepticismo los logros de la Seguridad Democrática. ¿Quién tiene la razón? ¿Hasta dónde la derrota militar de la insurgencia es tan inminente? ¿Hasta dónde tiene las Farc condiciones para “recomponer” su apuesta de tomarse el poder por la vía armada? Buscando ganar alguna claridad al respecto, trataré en lo que sigue de presentar algunos elementos que nos ayuden a considerar las distintas aristas de la actual situación del conflicto armado, y de esta forma poder avanzar elementos sobre eventuales escenarios de evolución de la misma.

Continuidad del conflicto armado

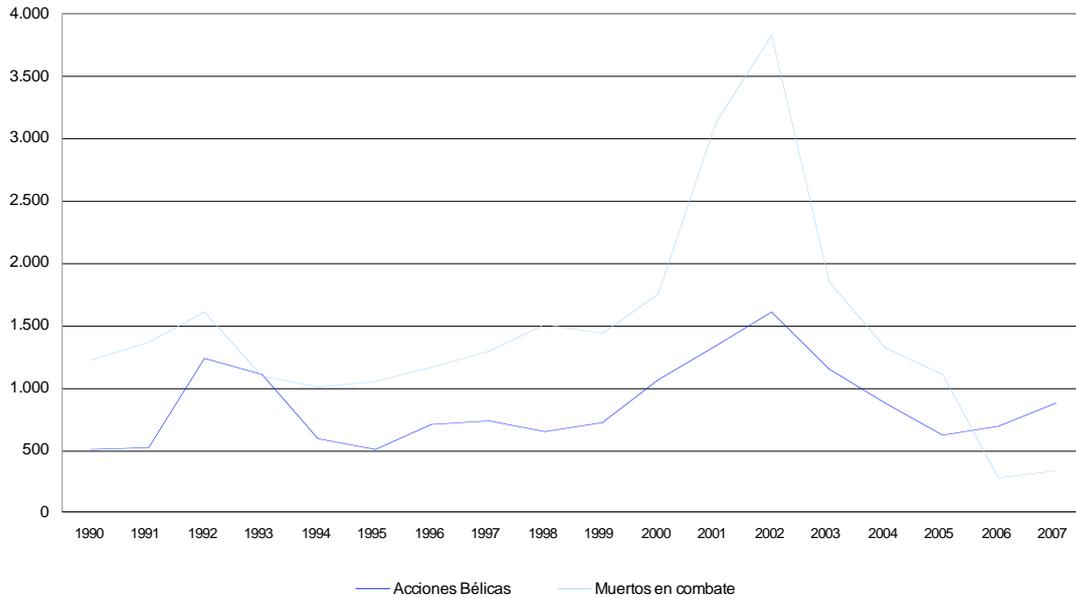
En primer lugar, se constata la continuidad de un nivel todavía significativo del conflicto armado, aunque también hay evidencia de que se ha operado un cambio en el escenario estratégico de la confrontación entre la insurgencia y la fuerza pública (ver Gráfico 1)¹. Cuando se mira la evolución de la confrontación armada, se ve claro que hubo un incremento sostenido de la misma entre 1998 y 2002, tanto en el número de acciones bélicas como en el número de muertos en combate. Es decir, la confrontación se disparó durante los años de Andrés Pastrana, cuando se negociaba con las FARC en el Caguán, lo cual muestra con claridad la doble estrategia de guerra y paz que se impuso tanto en el gobierno como en la insurgencia en esos años. Pero también se constata que ha habido un descenso importante de los niveles de acciones bélicas entre el 2002 y el 2005, y más significativo aún del número de muertos en combate entre el 2002 y el 2006. No en vano, pues, el parte de éxito que proclama el gobierno con su política de Seguridad Democrática.

Sin embargo, para valorar adecuadamente lo que significa este descenso hay que considerarlo comparativamente con los niveles que ha tenido el conflicto armado en los últimos veinte años. Las acciones bélicas, que han vuelto a subir en el 2006 y el 2007, siguen manteniendo, no obstante el descenso mencionado, un nivel que es equiparable al que presentó la confrontación armada durante gran parte de los noventa (con excepción de 1992 y 1993). Por otra parte, se constata un descenso relativo más alto en el número de combatientes muertos como resultado de las acciones bélicas, ya que éstos descienden en 2006 por debajo de la línea de los

¹ El análisis que se desarrolla en este artículo se basa en la información de la base de datos “Actores y dinámica del conflicto armado” (1990-2007), construida en el CINEP a partir de la información producida por el Banco de Datos de Derechos Humanos en sus distintas etapas.

1.000 muertos por año², por primera vez desde 1990, aunque vuelven a subir ligeramente en 2007. Aunque dicho descenso significaría que Colombia salió del estadio de conflicto armado mayor, hay otros indicadores que nos invitan a ser más prudentes en el análisis.

DINÁMICA DEL CONFLICTO ARMADO
Acciones Bélicas y Muertos en combate
1990-2007



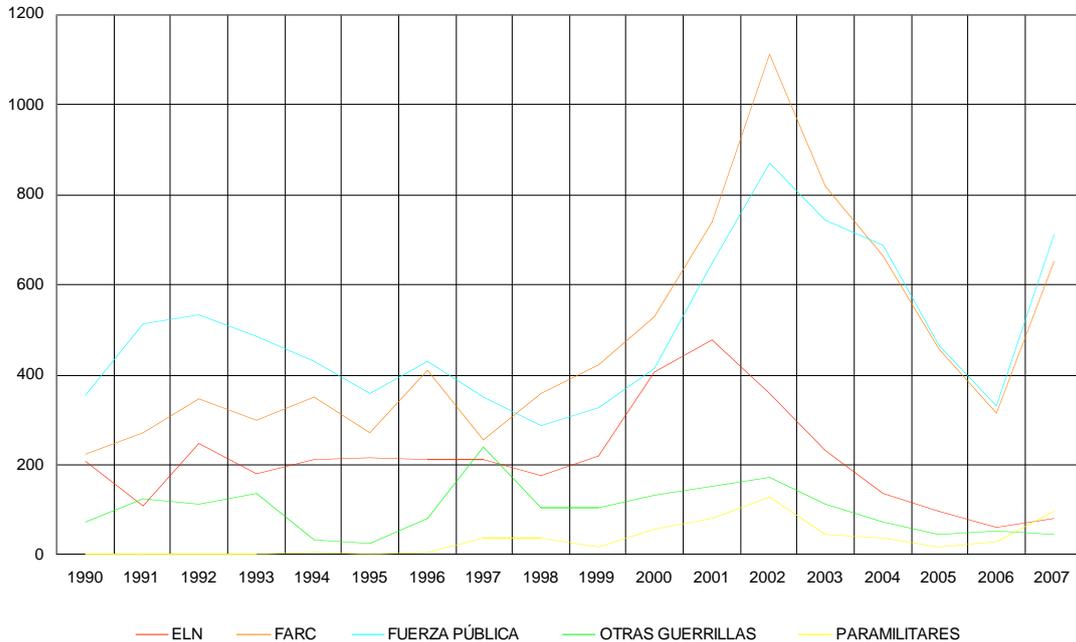
Además del nivel de acciones bélicas y muertos en combate se requiere considerar cómo evoluciona la cobertura geográfica del conflicto armado, es decir, qué tan amplio es el territorio afectado por el mismo. Se constata una tendencia similar: incremento del número de municipios afectados por el conflicto armado entre 1998 y 2002 hasta alcanzar la cifra de 498, y descenso entre el 2002 y el 2005, para volver a un ligero ascenso en el 2006 y 2007. Ahora bien, los 293 municipios afectados en 2007 representan un número superior o muy semejante a aquellos con conflicto armado durante toda la década de los noventa (227 municipios en 1990, 244 en 1995, 305 en 1999). ¿Qué podemos deducir de aquí? Básicamente dos cosas: que el territorio afectado por la confrontación armada comprende todavía un número importante de municipios y que el conflicto armado todavía tiene una cobertura nacional.

Las FARC: ¿cambio de escenario estratégico?

Para poder entender la evolución del conflicto armado es importante mirar de manera desagregada la participación de los distintos actores en la dinámica de la confrontación (ver Gráfico 2).

² Este es el parámetro internacional más utilizado para considerar que un país vive en guerra o conflicto armado mayor, como bien lo describe la base de datos de conflictos de la Universidad de Uppsala: <http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/index.htm>

DINAMICA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Hechos de Acciones Bélicas por actores armados
1990 - 2007



Al mirar el panorama a partir de 1990, se constatan cambios importantes en la dinámica de la confrontación y en el liderazgo que juegan los distintos actores en el mismo. Es evidente que lo más fuerte de la confrontación se ha dado entre las Fuerzas Armadas, particularmente Ejército, y las FARC. Esta confrontación se consolida prácticamente como la única de importancia a partir del 2003, cuando se constata una estrecha relación entre las acciones de ambas fuerzas. El papel de otros grupos guerrilleros, particularmente del ELN, se reduce significativamente a partir de 2001. Y los grupos paramilitares, dado su carácter antisubversivo y las relaciones/alianzas con la Fuerza Pública en diversas regiones, nunca alcanzaron un nivel significativo en las acciones bélicas, aunque sí en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Hay que considerar la evolución de la interacción entre FARC y Fuerzas Armadas. La Fuerza Pública está por encima del accionar bélico de las FARC hasta 1997, cuando éstas las superan en el número de acciones bélicas, en parte porque fueron los años de mayor confrontación directa con los grupos paramilitares y de consolidación militar de esta guerrilla al contar con la retaguardia de la zona del despeje del Caguán. A partir de 2004, ya en plena implementación de la Seguridad Democrática, las Fuerzas Armadas vuelven a recuperar la iniciativa. La acción de las Fuerzas Militares y de la Policía ha llevado a las FARC a retirarse a sus zonas de retaguardia, provocándole una importante pérdida de posiciones en amplios territorios; no obstante ello, la guerrilla aún conserva presencia y fortaleza en diversas regiones del país.

Ahora bien, hay un cambio importante que es necesario tener presente en el análisis de la evolución del conflicto armado: el escenario estratégico de hoy es muy distinto del que existía hace 10 años al iniciarse el proceso de paz en el Caguán. Mientras en 1998 había un escenario de confrontación que favorecía a las FARC luego de cuatro años de acciones ofensivas significativas contra las Fuerzas Armadas, hoy hay un escenario estratégico que favorece a estas últimas. Esta ventaja estratégica se ha dado gracias al uso de la aviación y los ataques aéreos, al

control de las comunicaciones y a un mejoramiento de las operaciones de inteligencia. Esto ha permitido que el gobierno con su política de Seguridad Democrática haya logrado golpes contundentes contra las FARC, tanto militar como políticamente, como se ha visto en el primer semestre de 2008.

Sin embargo, los niveles significativos de confrontación aún existentes, como lo muestra el incremento en las acciones bélicas en 2007 y un nivel todavía importante en el primer semestre de 2008 (304 acciones bélicas en 175 municipios), y la cobertura todavía nacional que tiene el conflicto armado ponen de presente que la derrota militar de las FARC puede no estar tan cercana como lo sostienen algunas fuentes oficiales. No obstante el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el énfasis en una estrategia meramente militar no garantiza el acabar con los grupos insurgentes, como se ha visto con el ELN. Menos cuando los abundantes recursos del narcotráfico siguen alimentando la guerra.

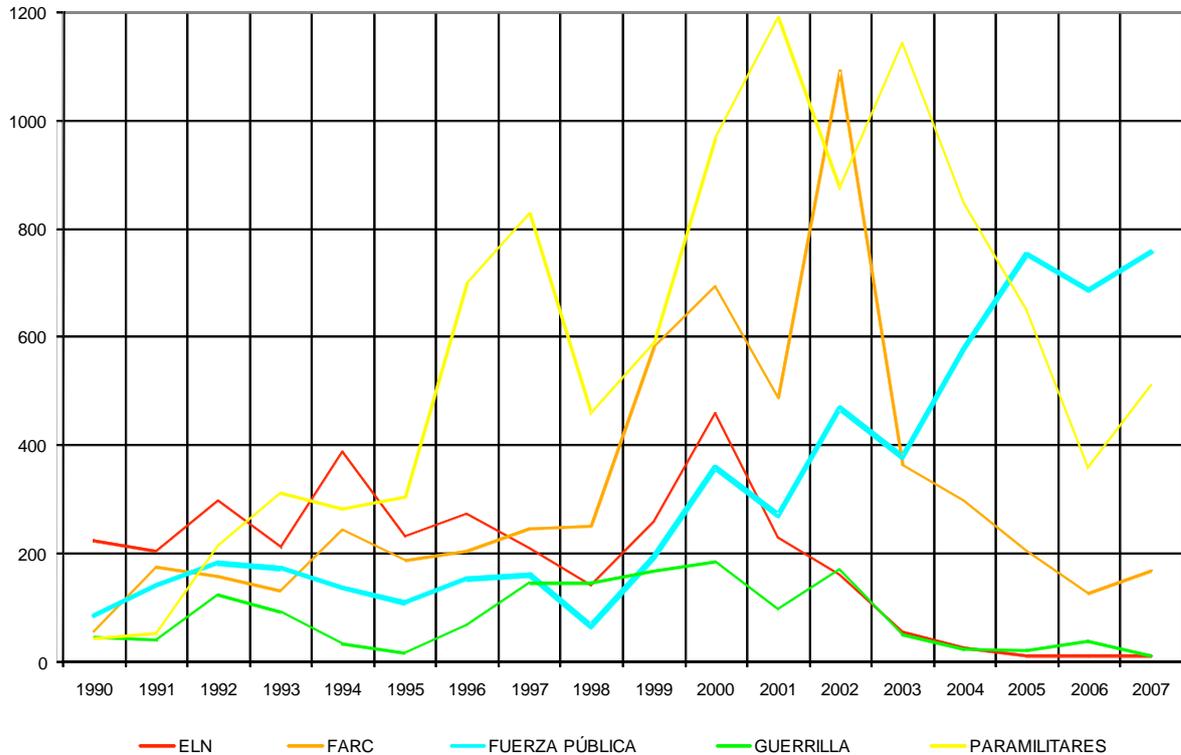
La 'otra' guerra

Para poder entender cabalmente la dinámica del conflicto armado en Colombia, es necesario prestar atención a la "otra" guerra que libran los actores armados de manera paralela a su accionar bélico, aunque estrechamente conectada a éste. Nos referimos a las infracciones contra el DIH, cometidas por los distintos actores armados contra la población civil (ver Gráfico 3). Los años más difíciles de esta "guerra contra la sociedad"³ se dieron en los años 2000 y 2001, con 2.291 y 2.277 infracciones al DIH respectivamente, y 4.431 y 5.744 víctimas fatales entre asesinatos políticos, masacres y desapariciones.

Al desagregar las infracciones al DIH, sobresalen varias tendencias. En primer lugar, sobresale el rol preponderante de los paramilitares, los mayores responsables de la barbarie contra la sociedad civil, como bien ha quedado establecido por sus propias declaraciones en las audiencias de la Ley de Justicia y Paz. Preocupa la continuidad del fenómeno paramilitar, no obstante la desmovilización de más de 32.000 de sus miembros. Ya sean disidentes que no negociaron, desmovilizados que se han vuelto a rearmar, o "nuevos" grupos (como las Águilas Negras), el hecho es que la responsabilidad de estos grupos en las infracciones al DIH se han vuelto a incrementar. Se evidencia cada día más que luego de la desmovilización se está dando una recomposición de poderes en las regiones para definir quién se queda con el control de las antiguas estructuras, muy ligadas tanto al narcotráfico como también a las estructuras políticas clientelares, como se vio en las elecciones de octubre de 2007. Por otro lado, la extradición de jefes paramilitares hacia los Estados Unidos dejó serios interrogantes sobre la capacidad del Estado colombiano para controlar su accionar delictivo y para hacerlos responder ante las víctimas.

³ Expresión acuñada por el sociólogo francés Daniel Pécaut en su libro "Guerra contra la sociedad" (Bogotá: Espasa Hoy, 2001).

DINAMICA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Hechos de Violaciones al DIH por actores armados
Años 1990 - 2007



En segundo lugar, también se constata el peso importante que tuvo las FARC entre 1998 y el 2003 en las infracciones al DIH, aunque su responsabilidad ha bajado en los últimos años. Algunas de estas infracciones, como los secuestros y el uso de minas antipersonales, han ganado relevancia en la opinión pública y han suscitado procesos crecientes de movilización social en su contra, los que han conllevado a una creciente deslegitimación social de la lucha armada. Por su parte, la responsabilidad del ELN en las infracciones al DIH ha venido descendiendo desde el 2000, una expresión más de la debilidad militar por la que pasa este grupo.

Preocupa en este contexto el incremento sostenido de las infracciones al DIH de parte de la Fuerza Pública, donde sobresalen los llamados “falsos positivos” y ejecuciones extrajudiciales. Mientras la responsabilidad de los actores armados ilegales en las infracciones al DIH desciende, la de la fuerza pública crece de manera sostenida desde 1998, cuando arranca el proceso de fortalecimiento con el Plan Colombia, y se acentúa en los años de la Seguridad Democrática. La exigencia de resultados en la lucha antiterrorista por parte del gobierno podría estar llevando, en una lógica perversa, a incrementar las infracciones al DIH por parte de las Fuerzas Armadas.

Escenarios posibles

De lo que hemos presentado hasta el momento se puede concluir que el conflicto armado continúa y con una cobertura nacional, que éste conflicto es básicamente entre las FARC y la Fuerza Pública, pero que ha habido un cambio de escenario estratégico en el mismo. ¿Qué se puede esperar hacia adelante? ¿Cuáles podrían ser los escenarios posibles de evolución del conflicto armado en Colombia? Grosso modo se pueden vislumbrar tres escenarios posibles.

Un primer escenario es una derrota militar contundente de la insurgencia. Aunque esta aparece como la apuesta gubernamental, que se apoya en los resultados obtenidos por las Fuerzas Armadas en estos seis años, las tendencias presentadas indican que puede ser un resultado difícil de alcanzar, más cuando se constata que se está presentando un punto de inflexión en las tendencias del conflicto armado a partir de 2006 y 2007, cuando el número de acciones bélicas, muertos en combate, infracciones al DIH y víctimas civiles vuelven a crecer. Por otro lado, los recursos del narcotráfico siguen "aceitando" la confrontación y la situación económica hace impensable un mayor incremento del ya alto gasto militar. Así las cosas, si no se ha logrado derrotar al ELN, ¿habría capacidad para hacerlo con las Farc?

Un segundo escenario, no deseable pero probable, es una variable del escenario anterior. Una absolutización de la solución militar, puede llevar como su derivado a una continuidad degradada del conflicto armado, particularmente en algunas regiones del país. Es innegable que las Farc han sido golpeadas a niveles importantes que afectan sus cuadros de dirección. Enfatizar este camino puede conllevar un serio riesgo de fraccionamiento del grupo armado, que, dadas las relaciones con el narcotráfico, puede incrementar el tipo de acciones delictivas y las infracciones contra el DIH que afectan la población civil. Este escenario se haría más complejo si se tiene en cuenta la continuidad de un fenómeno paramilitar, también sin mayor coordinación nacional, que puede exacerbar la lucha por quien controla los poderes regionales.

Un tercer escenario, deseable pero improbable en el futuro cercano, es el de una salida negociada al conflicto armado. Si en 1998 los sucesos militares de los años anteriores le impidieron a las Farc ver la importancia estratégica de una negociación de paz, hoy en día se puede vivir una situación similar pero con el gobierno. Los triunfos de la Seguridad Democrática están llevando al gobierno del presidente Uribe a no ver la importancia de una negociación que pudiera ser una solución de largo plazo. Su tendencia es ver las negociaciones simplemente como una forma de definir el proceso de desarme y desmovilización de los insurgentes, algo difícil de aceptar para un grupo como las Farc. Por otro lado, las actuales circunstancias también hacen que la incidencia de la comunidad internacional y de la sociedad civil a favor de una salida negociada haya perdido peso.

Las macabras encomiendas fúnebres del paramilitarismo en Córdoba

Por: Roberto Llanos Rodado. Reporteros de Colombia¹.
convocatorias@reporterosdecolombia.net

Edith María Laza Romero guarda frescos en su memoria, como si se tratara de una cinta cinematográfica que puede echar a rodar cuantas veces se le antoje, los pasos que dio su hijo Osvaldo Arturo Pestana Laza, el último día en que lo vio con vida. Era el 21 de junio del 2001, y en la humilde vivienda de la familia en el barrio La Palma, sector subnormal de Montería, se vivía un ambiente de fiesta.

Ese día, Osvaldo Pestana, padre de Osvaldo Arturo y de dos jovencitas más, llegaba a los 55 años de vida, y Edith María no quería que aquella ocasión pasara desapercibida en la casa. Por eso despertó a sus dos hijas a las 6 de la mañana para que le ayudaran a sacrificar un pavo, la base principal del plato con el que se celebraría aquel acontecimiento familiar. El cumplimentado, uno de los miles de mototaxistas que recorre las hirvientes calles de Montería, se había levantado una hora antes para iniciar la ardua jornada.

Cuidando no despertar a nadie salió sigilosamente, pues la idea era regresar a la cena, y esperar la felicitación de la familia en pleno como era la costumbre, recuerda Edith. Osvaldo Arturo, de 21 años, fue el último en levantarse. Lo hizo a las 8 de la mañana. A esa hora la casa ya estaba arreglada por sus hermanas, que tras ayudar en lo del pavo, se dedicaron a asear hasta el último rincón y a cambiar las cortinas que le darían el toque innovador y festivo a la vivienda.

"Lo noté normal, como de costumbre. Después de los buenos días me dijo: 'Tengo hambre'. Le di la pechuga del pavo que él mismo preparó, luego fritó un plátano maduro y lo acompañó con una gaseosa", rememora la madre con la mirada encharcada de lágrimas. Luego del succulento desayuno Osvaldo bromeó con sus hermanas y se metió al baño. De allí salió cambiado, y sin despedirse de nadie abandonó la casa a eso de las 9:30 a.m. En ese momento las muchachas reían a carcajadas con un humorista que presentaba la tele.

¹ Reporteros de Colombia es un proyecto que agrupa periodistas que ejercen su oficio en diferentes medios de prensa, radio, televisión e Internet. Estamos comprometidos con la búsqueda de estándares de calidad periodística como independencia, exactitud, contextualización y equilibrio. Cubrimos de manera responsable el conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en nuestro país. Contamos con el respaldo de la Pontificia Universidad Javeriana, Medios para la Paz y Programa por la Paz-CINEP.

Edith permanecía en el patio lavando ropa sucia, y dice que cuando escuchó el golpe de la puerta que se cerraba corrió a ver quién salía.

"Cuando me asomé ya caminaba por la mitad de cuadra, y me dije, '¿Caramba, y a dónde irá ese 'loco'?'".

No cargaba nada en las manos, ni una mochila, ni una bolsa, mucho menos una maleta que me indicara que iba de viaje", agrega en su doloroso relato.

El muchacho vestía un suéter azul, jean recién comprado, y unos tenis blancos con algo de uso. Edith permaneció parada en la puerta de la casa siguiendo el recorrido que le faltaba a su hijo para alcanzar la esquina. Por un momento creyó que iba a saludar a unos amigos que charlaban en el pretil de una casa, pero no les prestó atención y dobló sin siquiera mirar atrás.

"Esas imágenes para mi son imborrables, me acuerdo que todavía llevaba el cabello mojado por el baño", sigue contando la señora, ahora sí con una pausa, pues se desata en llanto.

Oswaldo Arturo Pestana Laza, bachiller de la promoción 1999 del Liceo Córdoba de Montería, hace parte de esa nunca completa estadística de jóvenes cordobeses que luego cumplir sus estudios secundarios quedan sin ninguna opción para estudiar o laborar.

Tal cual lo manifiesta Edith María con su ingenua, pero dura y real filosofía popular: "Sencillamente no contó con la ayuda de nadie. No hubo una persona que le diera trabajo o estudios". Sin otra alternativa en su vida el joven Pestana pasó a engrosar los grupos de autodefensas que en esa época hacían furor, y se convertían en la 'gran' fuente de empleo de la región.

Y fue esa mañana del 21 de junio, el día del cumpleaños de su padre, la escogida por el muchacho para alistarse en el azaroso mundo 'para'. En su paso efímero por estos grupos el joven hizo parte de un fenómeno que se hizo célebre en Córdoba a finales de los 90 y principios de los dos mil, y que todavía hace carrera, aunque con menos intensidad.

Se convirtió en una de las tantas encomiendas fúnebres acompañadas de fajos de billetes, que con dolor sorprendieron a muchas familias pobres de esta parte de la Costa Caribe. Esta práctica consistía en la entrega 'a domicilio' de los cadáveres de los jóvenes 'paras' muertos en combates, los cuales eran enviados a casa de sus padres en ataúdes, de madrugada, y de manera clandestina.

Los féretros llegaban acompañados de una remesa de dinero suficiente para los gastos del funeral, y con un remanente para la familia a manera de indemnización. Así, dentro de un ataúd, y con una paca de billetes en la que descansaba su cabeza, regresó Oswaldo Arturo a casa de sus padres, convertido en cadáver. Era el 23 de diciembre del 2001, dos días después de cumplir seis meses de haberse marchado.

La madre recuerda el día. "A las 12 de la noche me llamaron al celular. Presentí algo malo y no quise responder, pero insistieron.

"¿Usted es la mamá de Oswaldo? me preguntó la voz ronca de un hombre, y sin siquiera dejarme responder me dijo a gritos, '¡Páseme al papá!'".

Como fondo de aquella voz desconocida, Edith María recuerda que escuchaba un ambiente bullicioso, con música estridente, y gritos de gente borracha.

- "Sí, soy su mamá, el papá no está, ¿qué pasa?".

- "No se vaya a asustar, pero su hijo está muerto, en dos o tres horas llega el cuerpo, espérelo".

La mujer dice que llegó a creer de que se trataba de un sueño, pero todo a su alrededor era muy real como para ser una pesadilla.

Y para corroborarlo, a las 3 de la madrugada, tal como lo anunció aquella voz, una camioneta Toyota cubierta de un barro rojizo paró en casa de los Pestana con dos hombres a bordo.

Traían la 'encomienda fúnebre', el cadáver de Osvaldo Arturo con un disparo en la nuca. "Que lo sentían mucho, eso fue lo que dijeron", manifiesta Edith María. A esa hora la vivienda era un caos con los llantos de todos lo que lo querían. Osvaldo, el padre, era el más sereno, y quien alcanzó a dialogar con los siniestros mensajeros de la 'encomienda', sobre lo de la 'indemnización'.

Entre las pocas pertenencias que dejaron del joven había una fotografía en la que aparece vestido con uniforme militar, en un paraje del valle del Sinú. Irónicamente, esta foto es la única que Edith María conserva de su hijo, muy poco dado a estos registros.

"Pensar que me lo imaginaba estudiando contaduría, que era lo que gustaba", nos dice mientras contempla la foto.

En estos momentos a la señora se le vienen a la cabeza los angustiosos seis meses que permaneció desaparecido su hijo.

"Nunca se comunicó con nosotros durante el tiempo que estuvo con esa gente, una vez nos dijeron que lo habían visto en una camioneta por la calle 41 (de Montería), pero nada más", agrega.

Según la Policía de Córdoba, los reportes oficiales sobre este tipo de casos no cuentan con una estadística exacta, pues las familias ocultan los hechos y no los denuncian por temor a un proceso judicial. Sin embargo, en marzo pasado reseñaron un caso similar en el barrio Cantaclaro, otro sector deprimido del sur de Montería, en donde fue dejado un féretro con los despojos de Luis Carlos Díaz Ávila, un joven de 19 años que llevaba 15 días desaparecido.

La situación fue la misma, un vehículo llegó en la madrugada, dejó el ataúd a las puertas de la casa de la familia, no sin antes advertir que dentro de la caja fúnebre había dinero "para los gastos". Una nota escrita a mano informaba que el joven había sido asesinado en zona rural de Pailitas, departamento del Cesar. Sus padres manifestaron que no entienden cómo el muchacho fue a parar a ese lugar, cuando su oficio era vender jugos en el centro de Montería.

Al igual que Osvaldo Pestana, Díaz había abandonado su casa sin dar explicaciones de su paradero.

Aunque la Policía en Córdoba dice también no tener noticia acerca de estos reclutamientos, algunos jóvenes de los barrios Cantaclaro, El Dorado, y Rancho Grande, en el sur de Montería, confirman que sí los están convocando para

conformar nuevas organizaciones criminales, entre estas la de 'Los Paisas' y 'Los Traquetos', identificadas plenamente por la Policía.

La madre del joven Pestana conoció luego de la muerte de este, que los fines de semana llegaban al barrio los reclutadores de las Auc ofreciéndoles a los 'pelaos', licor y mujeres.

"Ese era el 'gancho', después borrachos era fácil convencerlos. En una de esas contactaron a mi hijo, eso todo el mundo lo sabía por aquí, pero solo me lo dijeron ahora cuando no hay nada que hacer", se lamenta la humilde mujer.

Edith María Laza sigue su vida al lado de sus dos hijas, de su esposo, el mototaxista Osvaldo Pestana; y aferrada a la palabra de Dios en una comunidad Cristiana.

El partido de la U y la fractura entre las elites colombianas

Por: María Clara Torres Bustamante. Politóloga. Investigadora de CINEP.
mctorres@cene.org.co

El actual gobierno constituye una experiencia relativamente exitosa por vincular los diferentes sectores de la dirigencia colombiana en torno a un proyecto político común. En ese sentido, la presidencia de Álvaro Uribe representa un intento por superar los débiles vínculos que han prevalecido en Colombia entre las elites regionales y el gobierno central.

Indudablemente, el Partido de la U es uno de los ejemplos que mejor ilustra los esfuerzos del Ejecutivo por agrupar a diferentes sectores políticos en torno a su proyecto político. Ideado en 2005 por Álvaro Uribe, entonces candidato-Presidente, "la U" es actualmente el partido de la coalición de gobierno con más escaños en el Senado de la República. Reúne a un conglomerado heterogéneo de barones electorales regionales de origen liberal y a una pequeña minoría bogotana de corte neoliberal y tecnocrática.

Sin embargo, las tensiones surgidas al interior del partido expresan claramente los límites de esta amplia asociación inter-élite. Temas como la influencia de los paramilitares en la vida política y la segunda reelección presidencial se han vuelto particularmente espinosos dentro de dicha colectividad, al tiempo que reeditan las viejas fracturas entre las elites provinciales y capitalinas.

El presente artículo está organizado de la siguiente manera: en la primera sección, se subraya la histórica incapacidad de los sectores dirigentes colombianos por mantener un proyecto político común y se hace énfasis en el carácter societal, privado y regional de las estrategias contrainsurgentes. En la segunda, se sugiere que la política de Seguridad Democrática constituye un esfuerzo por "estatalizar" la contrainsurgencia y por sintonizar los intereses de las elites regionales y las del gobierno central, sin que ello signifique mayores avances en el mantenimiento de las garantías democráticas. En la tercera y última sección, se analiza la actual coyuntura a partir de los conflictos suscitados dentro del Partido de la U, con el ánimo de desentrañar cuán compacta es esta coalición inter-élite que soporta al gobierno Uribe desde el Congreso.

La contrainsurgencia societal y regional

Para construir el argumento de este texto, es necesario explicitar brevemente algunos antecedentes de la relación entre las elites regionales y los gobiernos centrales en cuanto se refiere a la lucha contrainsurgente.

Contrariamente a otros países de América Latina, como Perú y Argentina, en Colombia la contrainsurgencia se ha caracterizado por tener un marcado acento regional y por la ausencia del Estado como protagonista central de esta empresa. Por supuesto, esto no excluye la activa participación de agentes estatales en la lucha contra las guerrillas. Más bien, esto significa que, ante la incapacidad del Estado de afirmar su autoridad en amplias porciones del territorio nacional, ha cedido el oficio de la contrainsurgencia a actores privados. El Estado aparece así como un actor más en la intrincada amalgama de la contrainsurgencia, no como el protagonista principal.

Y el Estado colombiano no es el agente más importante de la pacificación de la sociedad porque encarna tan solo un actor más en la configuración del poder regional. Cabe aquí la reiterada afirmación de Teófilo Vásquez según la cual en Colombia “hay más política que Estado”.

Así las cosas, la composición de los grupos contrainsurgentes varía según la sociedad regional en la cual se inscriben y de acuerdo con el tipo de elites existentes allí. En particular, la creación de alianzas regionales entre cuadros de los partidos tradicionales, sectores de las fuerzas de seguridad, narcotraficantes y elites agrarias ha creado un explosivo cóctel molotov.

Estas asociaciones han cobrado especial importancia cuando los gobiernos centrales han promovido negociaciones de paz con las guerrillas. La multiplicidad de pactos secretos suscritos entre políticos y comandantes de las autodefensas mientras se desarrollaba el proceso de paz Pastrana-FARC da cuenta de ello (consúltense los pactos de Necoclí, Chivolo, San Ángel y Ralito).¹ En dichas coyunturas, sectores de las Fuerzas Armadas desafiaron al gobierno central y se aliaron con las elites regionales en su intento por socavar los diálogos con la insurgencia.

El modelo societal, ilegal y regional de contrainsurgencia refleja así la fragmentación de los sectores dirigentes y sus débiles vínculos con el Estado y el gobierno central. Según Mauceri, esto se explica porque en Colombia las clases dirigentes tienen un carácter e identidad profundamente regionales, ligadas a la actividad económica específica de cada zona (ganadería, petróleo, café, arroz, banano y coca). El mismo autor sugiere que, si bien existen importantes conexiones entre las elites involucradas en estas actividades, cada sector tiene su propia estructura. En esa misma dirección, Mauceri arguye que “la base económica heterogénea y la diversidad regional de las elites colombianas han hecho históricamente difícil el planteamiento de un proyecto político común”.²

La “estatización” de la contrainsurgencia

La presidencia Uribe Vélez representa tanto una opción de mano dura para combatir a las guerrillas, como un intento por convertir al Estado en el protagonista principal de la pacificación. Esto implica sintonizar los intereses de las elites rurales con el gobierno central, aún si esto no implica una mayor profundización de las garantías democráticas.

Contrasta notablemente ver de qué manera los caciques regionales liberales y conservadores que durante el gobierno Pastrana suscribieron pactos secretos con los comandantes de las autodefensas se aglutinaron luego al interior de los nuevos

¹ Hemos registrado un total de doce pactos firmados entre 1998 y 2002.

² Mauceri, Philip, “Estado, elites y contrainsurgencia: una comparación preliminar entre Colombia y Perú” en *Revista Colombia Internacional*, número 52, mayo-agosto de 2001, Universidad de los Andes, Bogotá. p.59.

partidos *uribistas* para participar a plena luz del día en la coalición mayoritaria de gobierno en el Congreso.

Así, además de fortalecer los nexos con los poderes regionales, la “estatización” de la contrainsurgencia pasa también por dotar a las Fuerzas Armadas de mayores recursos y capacidades para combatir a la guerrilla. Como lo muestra un estudio adelantado por Fedesarrollo, el actual gasto en defensa y seguridad es el más alto de la historia colombiana. El documento señala que en 1990 ese renglón representó 2.1% del PIB, en 2000 pasó al 3.5% y en 2004 trepó al 4.5%. El aumento en el pie de fuerza también ha sido notable. El mismo estudio muestra que Colombia cuenta actualmente con 790 miembros de la Fuerza Pública por cada 100.000 habitantes, proporción muy superior a la de 580 que había a inicios de la década de los noventa.

De este modo, la estatización consiste en alinear al gobierno central, a las Fuerzas Armadas y a las elites regionales en la lucha contrainsurgente. En otras palabras, esto significa garantizar la lealtad de las Fuerzas Armadas hacia el gobierno central, de modo que éstas no “le hagan la vuelta” exclusivamente a las elites rurales. Implica igualmente cerrar cualquier posibilidad de diálogo con la guerrilla. Por supuesto, todo esto con un amplio apoyo de la población civil.

El anterior escenario se parece más al modelo contrainsurgente de tipo autoritario y “estado-céntrico” adoptado por Fujimori en el Perú, que a la contrainsurgencia societal, regional y privada que había prevalecido en Colombia hasta ahora.³ Por lo demás, vale la pena señalar que ambos modelos significaron trágicos costos para la población civil: las masacres, las torturas y las desapariciones forzadas han estado a la orden del día en ambos casos.⁴

Así las cosas, la presidencia de Álvaro Uribe logra vincular a las élites regionales a su proyecto político, y por esa vía, consigue fortalecer las relaciones entre los poderes regionales y el gobierno central. Por un lado, obtiene el apoyo efectivo de los caciques regionales de origen liberal y conservador, que no pueden sobrevivir en la oposición sin las dádivas que proporciona la burocracia nacional al mantenimiento de sus caudales electorales en las regiones. Y por el otro, se favorece con el respaldo de las élites bogotanas de corte más neoliberal, tecnocrático y con “ínfulas modernizantes”.

Como veremos en la siguiente sección, el aparente consenso entre élites capitalinas y provinciales en torno a la política de Seguridad Democrática aún reviste importantes matices, que van desde la opción contrainsurgente “a secas” hasta una abierta complicidad con los paramilitares.

Las tensiones al interior del Partido de la U

En las elecciones de 2006, el *uribismo* se convirtió en la fuerza mayoritaria del Senado de la República, al obtener un total de sesenta y un escaños, de los cuales “la U” acaparó la mayor porción individual con un total de veinte curules.

³ Para una ampliación de ambos modelos contrainsurgentes, véase: Mauceri, Philip, “Estado, elites y contrainsurgencia: una comparación preliminar entre Colombia y Perú” en *Revista Colombia Internacional*, número 52, mayo-agosto de 2001, Universidad de los Andes, Bogotá. p.44-64.

⁴ *Ibid.*, p.62

Esta colectividad ha sido fuertemente cuestionada debido a los vínculos que algunos de sus miembros mantienen con los paramilitares. Seis de sus congresistas están siendo investigados y dos de ellos ya están en la cárcel.⁵

Y precisamente uno de los que está privado de la libertad, Carlos García Orjuela, era, ni más ni menos, el presidente del partido y tuvo que renunciar a esa distinción. Su detención ocurrió después de que la Corte Suprema de Justicia obtuviera testimonios de acuerdo con los cuales García Orjuela habría suscrito en 2001 un pacto con los comandantes del Bloque Tolima para gestionar proyectos de inversión social en sus zonas de influencia, a cambio de un respaldo político de esos grupos ilegales.⁶

Como lo ha venido registrando la prensa, la situación no es nada alentadora para las huestes del Presidente en el Congreso. García Orjuela es el quinto jefe de un partido uribista investigado por vínculos con la *parapolítica*. Los otros son Luis Alberto Gil, de Convergencia Ciudadana; Álvaro Araújo, de Alas Equipo Colombia; Dieb Maloof, de Colombia Viva, y Mario Uribe, de Colombia Democrática (recientemente absuelto por la Fiscalía). Sólo Cambio Radical no acusa golpes en su cúpula, pero tiene a diez congresistas judicializados por esta razón. García Orjuela es así mismo el tercer ex presidente del Congreso preso por iguales motivos.⁷

El fenómeno de la *parapolítica* ha ahondado las fracturas al interior del Partido de la U. La colectividad está hoy dividida entre un sector mayoritario, liderado por Carlos García Orjuela, Zulema Jattin (senadora cordobesa también investigada) y Jorge Visbal Martelo, ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, y una minoría disidente integrada básicamente por las congresistas capitalinas Martha Lucía Ramírez y Gina Parody, de corte más tecnocrático y neoliberal.

Los puntos de quiebre en el seno de esta amplia coalición interélite, bien representada en el Partido de la U, son fundamentalmente dos asuntos: la influencia del paramilitarismo en la vida política y la reelección presidencial de Uribe. La disidencia ha criticado que el partido se hubiera negado sistemáticamente a “modernizarse” y a romper con las prácticas clientelistas. Ramírez afirma que “El Partido de la U está en la picota pública por cuenta de su presidente” y enseguida advierte sobre la necesidad de “tomar medidas para evitar la contaminación de la política por parte de las mafias. Lamentablemente son muy pocos en la U –sostiene– a los que les preocupa ese desprestigio o se dan cuenta de que existe. Están demasiado atentos a la figura del Presidente, a que los cubra la buena imagen del Presidente, lo que ha permitido cierto grado de impunidad política”.⁸

Mientras el combo liderado por García Orjuela se hizo responsable de toda la logística destinada a recolectar cinco millones de firmas que permitan convocar a un referendo que dé vía libre a una segunda reelección de Álvaro Uribe, las senadoras bogotanas se apartaron de tal iniciativa. Pese a su fuerte talante uribista, las dos fogosas líderes se oponen a un tercer mandato del Presidente por considerarlo “perjudicial para la institucionalidad”.⁹

⁵ Datos Indepaz. Véase: www.indepaz.org.co (15 de agosto de 2008).

⁶ Los comandantes paramilitares fueron posteriormente asesinados. El Tiempo, 25 de julio de 2008.

⁷ El Tiempo, 25 de julio de 2008 y El Tiempo 28 de julio de 2008. pag 1-4.

⁸ El Tiempo, 28 de julio de 2008, pag 1-6.

⁹ El Tiempo, 28 de julio de 2008, pag 1-6.

Sin embargo, la minoría disidente comparte con sus compañeros de bancada la simpatía por el modelo contrainsurgente adoptado por Uribe. La senadora Ramírez sostiene: “estoy totalmente comprometida con su política de seguridad democrática [la de Uribe] porque la diseñé bajo su dirección, con el valor agregado adicional de que quisiera meter al país en los temas del siglo XXI: ciencia, tecnología, innovación, competitividad, desarrollo global”.¹⁰

En el fondo, la pelea en “la U” es un conflicto enderezado a definir qué sector político es el hijo legítimo de Uribe y cuál es el heredero del capital político del Presidente, teniendo en cuenta que éste aglutina a ambos sectores políticos.

Como hemos visto, el actual gobierno logra vincular a diferentes sectores de la dirigencia política colombiana en torno a su proyecto político. Sin embargo, el forcejeo en los mandos de “la U” revela que la fractura entre élites capitalinas y provinciales está lejos de soldarse.

En todo caso, ante el descrédito de los partidos tradicionales, los dos sectores de la puja interna beben el agua de la misma fuente: el éxito electoral de Uribe. Una encuesta revelada en el mes de junio por El Espectador señalaba que apenas el 10% de los encuestados confía en los partidos, mientras más del 80% simpatiza con el Presidente.¹¹ Como bien lo advirtiera el político liberal Rafael Pardo, “uribismo sin Uribe es como el café sin cafeína o el azúcar sin sacarina”.¹²

¹⁰ El Tiempo, 28 de julio de 2008, pag 1-6.

¹¹ El Espectador 01/06/08. pag 55

¹² El Nuevo Siglo 23/06/08 Pag A8, A9

Las carreteras en el gobierno Uribe ¿hecatombe o enredo?

Por: Silvia Otero Bahamón. Joven Investigadora CINEP - ODECOFI¹.
sotero@cenep.org.co

Colombia presenta en estos momentos unos importantes retos en el tema de infraestructura del transporte, de cara a su anhelado desarrollo económico. ¿Qué balance se puede realizar después de seis años de mandato de Álvaro Uribe en esta temática? ¿El énfasis en “carreteritas” y “puentecitos” han dado los resultados propuestos? ¿El gobierno ha tenido más política y menos técnica en el asunto?

Hace varias décadas, un historiador norteamericano documentaba que en la Colombia del siglo XIX, “los caprichos del río Magdalena fueron siempre tema de comentarios llenos de amargura y frustración”, y que “dos veces al año, al final de cada verano cuando prolongadas sequías hacían bajar el nivel del agua del río (...) los proponentes de la construcción del ferrocarril lanzaban fuertes gritos pidiendo acción. (...) Pero cuando las lluvias empezaban a caer otra vez y el tráfico podía moverse, la cuestión de la construcción de ferrocarriles caía en el olvido. En tiempo de verano, se libraba la batalla, en invierno, descansaba”². Hoy, en la Colombia del siglo XXI puede decirse lo mismo. Las precarias condiciones de la red de carreteras son tema de comentarios llenos de amargura y frustración. Dos veces al año, cuando arrecia el invierno y los derrumbes bloquean las vías, causan accidentes y encarecen los precios de los alimentos, los proponentes de la recuperación de la navegabilidad de río Magdalena, de la rehabilitación de las ferrovías abandonadas, y de la realización de autopistas de dobles calzadas, túneles y vías alternas, lanzan fuertes gritos pidiendo acción. Cuando llega el verano y el tráfico otra vez puede moverse, estas cuestiones caen en el olvido. En tiempo de invierno, se libra la batalla, en verano, descansa.

En los últimos dos meses, con el último invierno, los transportadores, los gremios y el gobierno libraron nuevamente esa batalla. En esta ocasión los derrumbes se agravaron con el sismo de mayo, dejando estelas de muerte en varios trayectos. Los cierres de la vía a Villavicencio y de la Línea causaron estragos en los bolsillos de los colombianos. Hubo paro de camioneros, innumerables críticas al ministro de transporte, amenazas de renuncia del director del INCO³ y escándalos por las adiciones presupuestales a las concesiones. En esta ocasión las propuestas pasaron por unir los sistemas férreos de Venezuela y de Colombia, la construcción de la autopista Bogotá – Santa Marta, la construcción de una vía alterna al llano y la

¹ Agradezco a Camilo Montañez por la ilustración del artículo.

² Robert Carlyle Beyer, “El transporte y la industria del café en Colombia”, En Jesús Antonio Bejarano (ed), *El Siglo XIX en Colombia visto por historiadores norteamericanos*, Editorial La Carreta, Medellín: 1977, pp 263.

³ Instituto Nacional de Concesiones.

recuperación del río Magdalena. Todo esto mientras el gobierno para defenderse de los señalamientos sacaba pecho por la finalización del Túnel Piloto de la Línea y calmaba los ánimos asegurando que los recortes presupuestales no afectarían la infraestructura.

Durante la batalla, los gremios, columnistas y algunos medios de comunicación⁴ afirmaron que el gobierno Uribe ha sido incompetente frente a los retos en infraestructura⁵. Recalaron que en los seis años de mandato, el gobierno se ha concentrado en las vías secundarias y terciarias en vez de adelantar obras en los corredores arteriales (troncales y transversales). Es decir, que en vez de preocuparse por mejorar la competitividad del país en un mundo globalizado, el gobierno se ha preocupado por la integración de pequeñas regiones⁶. Dijeron que si bien esas vías son importantes, no son prioritarias, ya que deben ser asumidas por los departamentos; y criticaron que en el entretanto, las vías que sí corresponden a la nación (las troncales y las transversales) se están deteriorando a pasos agigantados⁷. Y a sus ojos el panorama termina de empeorar si se tiene en cuenta que el énfasis en “carreteritas” y “puentecitos” le ha permitido al gobierno dar gusto a caprichos burocráticos y políticos que tienen como primeros beneficiarios los barones electorales y los constructores regionales⁸. Por último, le exigieron al gobierno menos política y más técnica y menos visión local y más visión nacional en materia de infraestructura del transporte.



Los reclamos que gremios y medios le hicieron al gobierno reflejan cómo a menudo, los proyectos en los corredores arteriales son mostrados como de interés nacional, mientras que los de red secundaria y terciaria son mostrados como proyectos mediados por intereses locales y regionales de menor estirpe, disfrazados de políticas contrainsurgentes o integracionistas. En este caso, el origen de las críticas es el proyecto bandera de la administración Uribe 1 y 2 en el sector: el “Plan 2500”, con el que INVIAS se comprometió a construir, pavimentar y rehabilitar 3125 km. de carreteras secundarias y terciarias con una inversión de 1.8 billones de pesos, con obras en todos los departamentos del país. Dicho plan ha sido calificado como politiquero y regionalista precisamente porque en vez de establecer criterios técnicos rigurosos para la selección de proyectos dejó el poder de selección en el

⁴ En especial Fedesarrollo, Cámara Colombiana de Infraestructura y la Andi se manifestaron al respecto. En cuanto a periodistas, las columnas de Salud Hernández fueron bastante discutidas, y El Espectador, El Tiempo, Semana y Cambio produjeron importantes informaciones sobre la materia.

⁵ Revista Semana, “La Hecatombe vial”, No. 1368, 7/19/2008.

⁶ Declaraciones del director del INVIAS en “Plan 2500 en su recta final”, El Tiempo, 29/04/2008 Pág. 2

⁷ Mauricio Cárdenas, director de Fedesarrollo en Ibíd.

⁸ Editorial de El Espectador, “El problema de la infraestructura vial” 16/07/2008, Pág. 26 y Editorial de El Tiempo “País sin carreteras”, 18/05/2008 Pág. 1-26

primer mandatario. Esto por cuanto las obras debían ser concertadas, propuestas y escogidas en Audiencias Públicas, eventos convocados y dirigidos por el propio presidente⁹.

Y es que el Plan 2500 cumplió todos los requisitos para ser catalogado de esa forma. Después de la etapa de Audiencias Públicas se escogieron más de 200 proyectos, de los cuales solo 9 superaron los 50km. Los otros fueron pequeños tramos de 10, 5 y hasta 1 km. No hubo ningún énfasis especial en regiones con una red vial nula (Guaviare, Amazonas, Vichada y Guainía sólo tienen 1 proyecto cada uno) y los departamentos con más recursos destinados fueron los que gozaban de mayor red vial secundaria y terciaria (Antioquia, Cundinamarca y Boyacá están en los 3 primeros lugares). Es evidente que 200 proyectos generan más réditos políticos que 10; que con ese dinero se hubieran podido hacer proyectos de mayor impacto; y que los intereses de las clases políticas locales y regionales determinaron la selección de las obras.

El Plan 2500 es así la expresión por excelencia de la politiquería y el regionalismo en infraestructura, justo lo que los gremios, técnicos y medios de comunicación critican, y en eso tienen toda la razón. Sin embargo, hay que tener cuidado con las demandas de “más técnica” y “más visión nacional” de estos sectores. Simplificando un poco, la fórmula que los gremios y tecnócratas critican es *obras en red secundaria y terciaria = visión local = politiquería = no prioritario*. A esta fórmula, ellos oponen la siguiente, que es la que desean y exigen al gobierno: *obras en red primaria = visión nacional = técnica = prioritario*. Ahora bien, lo que no se ha dicho y lo que no es tan visible, es que detrás de cada uno de los elementos de esta segunda fórmula también se agazapan intereses regionales y sectoriales específicos que son –sobre todo– muy políticos. En otras palabras, lo que los gremios y tecnócratas venden como “técnico” o “racional” o “nacional” o “prioritario”, son también apuestas por favorecer a unas regiones y a unos sectores económicos específicos.

Los reclamos que gremios y medios le hicieron al gobierno reflejan cómo a menudo, los proyectos en los corredores arteriales son mostrados como de interés nacional, mientras que los de red secundaria y terciaria son mostrados como proyectos mediados por intereses locales y regionales de menor estirpe, disfrazados de políticas contrainsurgentes o integracionistas.

Un ejemplo: ¿cuáles fueron las obras “nacionales” aclamadas por los detractores del gobierno durante el invierno? La “Ruta del Sol” que comunica con una autopista de doble calzada a Bogotá con Santa Marta; la vía alterna al llano, que permite que la despensa de Bogotá sea accesible todos los días del año; la doble calzada de la vía Bogotá – Costa Pacífica, que facilitará el comercio exterior del centro-occidente del país. Estas obras, sin duda son muy importantes, pero es evidente que favorecen a unas regiones específicas –como el centro del país– y no a todas las regiones. Por eso, no deberían denominarse “nacionales”: ¿qué le puede importar a los putumayenses la vía alterna al llano? ¿O a los vallecaucanos la ruta del sol? A lo mejor nada.

⁹ Esto se demuestra al comparar el primer Conpes que autorizaba el Plan 2500, (Conpes3261) con el segundo Conpes, el 3311 que hace modificaciones a los requisitos de elegibilidad de proyectos. Disponibles en www.dnp.gov.co

Siguiendo con los mismos ejemplos habría que preguntarse quiénes se beneficiarían con esas carreteras aclamadas que Uribe no ha hecho. ¿Todos los colombianos? ¿O sólo algunos sectores económicos? Dichas carreteras, al buscar comunicar los centros de producción más importantes con los puertos en las dos costas y con sus zonas de abastecimiento beneficiarían a los exportadores, los camioneros, los importadores y los gremios productores. Otros sectores económicos no resultarían tan beneficiados con estas obras supuestamente racionales y prioritarias. Tal es el caso de los pequeños campesinos, quienes necesitan, en vez de una carretera para exportar su producción, una carretera para sacarla de sus propias fincas. Es decir, una obra en red secundaria y terciaria más que una obra en red primaria.

Lo que revela el debate del invierno pasado sobre la precariedad de la infraestructura en Colombia, es que lo “técnico” y lo “nacional” integra unas regiones y favorece unos sectores específicos, mientras que lo “político” y lo “regionalista” o “parroquial”, integra otras regiones y favorece otros sectores específicos. Sea cual sea la posición que tomemos en el debate, es fundamental entender que no hay una cara buena ni una cara mala. Sólo dos caras con apuestas políticas diferentes.

Es evidente que 200 proyectos generan más réditos políticos que 10; que con ese dinero se hubieran podido hacer proyectos de mayor impacto; y que los intereses de las clases políticas locales y regionales determinaron la selección de las obras.

La apuesta de los gremios y de los técnicos es muy válida pues es muy contradictorio que un gobierno descuide los corredores arteriales y se dedique a las vías secundarias cuando al tiempo insiste en el TLC con Estados Unidos y avanza negociaciones con 54 países más. Además sigue siendo cierto que en pleno Siglo XXI no tenemos una infraestructura de transporte que nos permita ni siquiera competir con nuestros vecinos latinoamericanos.

Pero la otra cara es igualmente válida, ya que es cierto que esas regiones del Plan 2500 necesitan unas vías que bajo la “racionalidad técnica” nunca podrán recibir. Que la integración subregional también es importante aunque genere beneficiarios menos “nacionales” y visibles. Que no es del todo justo que las preocupaciones regionales sean siempre traducidas como “particulares” y “politiqueras”, y que si la integración de esas regiones no es rentable económicamente, al menos queda la alternativa de ser rentables políticamente.

El hecho es que ante la escasez de recursos no se pueden hacer las dos cosas al tiempo: toca escoger unos favorecidos y unos perjudicados. ¿Cómo tomar partido en este enredo? Eso depende de los intereses de cada quien. Sin embargo, independientemente de la posición en la que nos encontremos, el esquema de selección de proyectos inventado por Uribe sí debe ser motivo de reprobación. En lo que respecta al Plan 2500 las Audiencias Públicas fueron pensadas como espacios para concertar con las comunidades las obras a ejecutar. Pero lo cierto es que esa *concertación* significó una *concentración* del poder de selección de los proyectos y de repartición de los recursos estatales en la figura y voluntad del primer mandatario. Como él mismo se refirió sobre las Audiencias, “*el país también necesitaba sustituir los auxilios parlamentarios por un gran programa de discusión de obras públicas en público*”¹⁰. En esa sustitución Uribe se convirtió en el único

¹⁰ Palabras del Presidente en la Primera Evaluación del Plan 2500, La Ceja Antioquia, 1 de febrero de 2006, <http://www.presidencia.gov.co/sne/2006/febrero/01/16012006.htm>

intermediario necesario para que las regiones y los poderes locales accedieran a los recursos del estado central, y las obras dejaron de verse como fruto de una política pública para percibirse como bondadosos regalos del presidente. Así, saltándose otras instancias institucionales y otros criterios relevantes, el presidente se ha fortalecido a sí mismo actuando por fuera del estado y avanzando un poco más en la desinstitucionalización que se respira en el ambiente nacional.

Las consecuencias de esa desinstitucionalización todavía están por desatarse. El hecho es que en las últimas semanas Uribe cambió la orientación e hizo un poco de caso a los gremios y los medios de comunicación. Anunció el Plan de Corredores Viales de Competitividad que planea pavimentar 1522 km. y construir 162 km. de la red arterial con 2.6 billones de pesos; se comprometió a estructurar la concesión de la Ruta del Sol, y subió el presupuesto para que la construcción del Túnel de la Línea fuera atractiva para los capitales privados. Con la realización de estos proyectos el gobierno espera dar curso a las aspiraciones de "competitividad" de algunos sectores sociales y económicos. Y su gobierno, en los 8 años de mandato, tendrá tiempo y recursos suficientes para dar un poquito de gusto a ambas alternativas, y obtener, como es de esperarse, réditos políticos duplicados. Aunque debemos esperar, porque es muy probable que esas iniciativas no resistirán el siguiente verano.

La radiografía de la parapolítica

Por: Observatorio de Conflicto Armado. Corporación Nuevo Arco Iris.
nuevoarcoiris@etb.net.co

Cuando se iniciaron los primeros estudios académicos sobre la Parapolítica, se habló de los departamentos de Antioquia, Cesar, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Meta, Córdoba, Norte de Santander, Sucre, Arauca, Casanare y La Guajira. Hoy día la justicia no solo ha tenido en cuenta las zonas que mencionan estos análisis, sino que se ha extendido a departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Santander, Caldas, Risaralda, Guainía, Caquetá, Tolima, Amazonas y Cundinamarca, lo que demuestra que este asunto no se va a detener, al menos por ahora.

La Corte Suprema de Justicia no se ha detenido en su labor, y ha logrado establecer más vinculaciones, por lo cual ha llamado a investigación bien se carácter preliminar o de carácter formal, a los senadores Armando Benedetti, Dilian Francisco Toro, Luis Humberto Gómez Gallo, Luis Fernando Velasco, Carlos García Orjuela, Nancy Patricia Gutiérrez, Juan Carlos Martínez, Eduardo Enrique Maya, Antonio Valencia, etc. Y por la Cámara de Representantes en los últimos meses hizo llamamiento a Emilio Enrique Ángel, Miryam Paredes, Iván David Hernández, Jorge Ignacio Morales, etc.

No es posible determinar tácitamente si el hecho de que algunos congresistas investigados por Parapolítica, hayan renunciado a su curul con el fin de evadir a la Corte Suprema de Justicia y así pasar a manos de la Fiscalía, donde probablemente por ser juzgados como ciudadanos de a pie, y por tener la posibilidad de apelar el fallo en el caso de que este sea en contra, tengan más opciones de ser absueltos, bien sea por determinación de la justicia o por la preclusión del caso por demora en las investigaciones, como parece estar sucediendo en más de un caso, donde hasta el momento no se conocen avances del ente investigador, como el departamento de Santander, en donde los senadores Luis Alberto Gil y Oscar Josué Reyes, y el Representante Alfonso Riaño, todos del movimiento Convergencia Ciudadana, a quienes se les vinculó el 25 de julio de 2007, renuncian a su cargos y muy a pesar de que el ente investigativo lleva un año con los procesos abiertos, hasta el momento no se tiene ninguna decisión, lo que lleva a pensar que para los congresistas es mejor pasar a manos de la Fiscalía, que ser juzgados por la Honorable Corte Suprema de Justicia, su juez natural.

Con todo este asunto la imagen que tiene el legislativo en la opinión pública ha empeorado, sin embargo a ellos parece importarles muy poco, lo que es posible determinar en la medida en que en su mesa directiva nombra como primer vicepresidente a Oscar Suarez Mira, quien tiene investigación en curso por los mismos hechos y a la cabeza han estado personajes que hoy día tienen el mismo problema como Luis Humberto Gómez Gallo, Nancy Patricia Gutiérrez, Dilian Francisca Toro, Mario Uribe y Carlos García, de los cuales tres de ellos se encuentran detenidos.

Los salpicados por Rocío Arias

La Corte Suprema de Justicia ha tenido muy en cuenta las declaraciones de la ex representante Rocío Arias, personaje que llegó al congreso en el 2002 con la ayuda de los jefes de las autodefensas conocidos como alias Cuco Vanoy y Don Berna, quienes para ese entonces tenían el control en el Bajo Cauca Antioqueño, donde Arias logró la mayor votación.

Rocío Arias en sus distintas declaraciones ha salpicado a más de un legislador como Armando Benedetti, Senador del partido de la U. Dentro del testimonio, la ex parlamentaria Rocío Arias, asegura que el senador Benedetti asistió a la cumbre que se conoce como la Cumbre del Caramelo, junto con más políticos que hoy día se encuentran judicializados. Dicha reunión se celebró en la clandestinidad, y asegura Arias que el parlamentario estableció acuerdos que no se firmaron. Con anterioridad, Luis Manuel Córdoba del Castillo, beneficiario del programa de Protección a Testigos de la Fiscalía en entrevista con el Espectador.com, en mayo de 2007, aseguró que antes del pacto de Santa Fe de Ralito, hubo una reunión en el municipio cordobés de Nueva Granada, que se llamó El Granadazo, en donde según el testigo, por allí se hicieron presentes los senadores Armando Benedetti, Álvaro Araújo, Carlos Moreno de Caro y Zulema Jattin.

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra la Senadora Vallecauna Dilian Francisca Toro, a quien según declaraciones de Rocío Arias, los paramilitares dieron apoyo en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Ante tales acusaciones la senadora pidió a la Honorable Corte se le cite para una ampliación de su declaración.

Dilian Francisca Toro es senadora del Partido de la U, nacida en el Valle del Cauca. En su caso, la Corte estudia también una escueta declaración de un testigo que también la vincula con organizaciones ilegales y relaciona a su esposo, el ex senador Julio Cesar Caicedo Zamorano como testaferro del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Además de esto, según información de la W radio durante su programa mañanero el sábado 25 de julio, *"el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, quien se encuentra en Estados Unidos negociando su condena con las autoridades de ese país, denunciará en Colombia al esposo de la ex presidenta del Congreso Dilian Francisca Toro, Julio César Caicedo como testaferro y promotor de grupos paramilitares en el Valle. Según la información del narcotraficante, Caicedo habría hecho negocios con él y también habría ido a visitarlo a la cárcel de Villahermosa en el año 1.998 con el paramilitar Ever Veloza, alias HH, para que les financiara la creación del bloque paramilitar Calima. La información señala que Víctor Patiño Fómeque le habría entregado dinero a Caicedo para financiar la campaña al senado de su esposa, Dilian Francisca Toro"*.

Otro de los casos que tiene en vilo a la opinión pública, quien se encuentra a la espera de resultados, es el de la también ex presidenta del senado, Nancy Patricia Gutiérrez.

A Nancy Patricia se le abrió investigación, en parte por las declaraciones de Rocío Arias, quien la vincula con los alias El pájaro y Alias El Águila, paramilitares de Cundinamarca de quienes, según Arias, la parlamentaria Gutiérrez se benefició electoralmente. La Senadora Gutiérrez niega tales vínculos y argumenta su defensa en el hecho de que para elecciones de 2006 ella reduce su participación electoral pasando de 39.322 votos en el periodo 2002-2006, en el que ocupó una curul en la Cámara de Representantes de Bogotá, por el Movimiento Colombia Siempre, a 37.611 votos en el periodo 2006 -2010 para Senado.

A lo dicho por Nancy Patricia se debe tener en cuenta que para la Cámara de Representantes se concentra votación en un solo departamento, razón por la que al pasar a Senado se corre el riesgo de reducirla, ya que para este nivel la carrera proselitista se amplía a todos los departamentos. Además de esto cuando se teje un acuerdo de este tipo, no se lo hace con el único objetivo de obtener una alta votación, sino de acceder al puesto o mantenerlo si es el caso. Cabe resaltar que la senadora Nancy Patricia Gutiérrez en las últimas elecciones continua con mayor votación en Cundinamarca donde logra un total de 28.281 sufragios, según datos de la Registraduría Nacional.

El último de los salpicados por la ex parlamentaria Rocío Arias es el actual Representante a la Cámara por el departamento del Valle, Luis Carlos Restrepo del Partido de la U, de quien insistió en repetidas ocasiones durante la última audiencia en la Corte Suprema de Justicia, que el parlamentario habría hecho acuerdos con los grupos de autodefensa que operaron en este departamento y el sur del país, liderados por Alias Macaco. Restrepo fue alcalde y concejal del municipio de Cartago, y diputado de la Asamblea del Valle.

Arias involucró también al senador liberal Luis Fernando Velasco, quien fue puesto en libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, al determinar que el delito de cohecho impropio por el cual estaba siendo procesado, no prevé detención porque la pena es menor a cuatro años de cárcel en la normatividad.

Actualmente Rocío Arias fue sentenciada a 45 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir. La ex congresista aceptó que pertenecía al ala política de las Autodefensas Unidas de Colombia y se acogió a sentencia anticipada. Durante su paso por la Cámara de Representantes, en compañía de la ex parlamentaria detenida por Parapolítica, Eleonora Pineda, defendió la Ley de Justicia Y paz y presentó un proyecto de reforma constitucional para evitar la extradición de colombianos, en el que claramente se beneficiarían narcos y paramilitares solicitados por la justicia de Estados Unidos.

La justicia también ha fallado a favor de políticos nacionales y regionales

En la Parapolítica hoy día ya se ven casos de absolución judicial a políticos tanto del nivel regional como del nacional.

En el caso del regional los entes judiciales han absuelto al ex diputado del departamento de Córdoba, Álvaro Cabrales, Jhony Guillermo Villa del departamento de Sucre, y por pena cumplida se encuentra libre el ex diputado del departamento de Sucre Ángel Villareal.

Mientras que en las investigaciones a políticos nacionales, se absolvió al ex representante de Córdoba Freddy Sánchez, y por el mismo departamento la investigación al ex representante Luis José Álvarez, precluyó.

De los parlamentarios actuales se han cerrado los casos de: Guillermo Rivera, Representante por el departamento de Putumayo, Javier Ramiro Devía, Representante a la Cámara por el departamento del Tolima, el Senador Antioqueño Gabriel Zapata, y el Senador de Sucre Jairo Merlano, todos a favor.

Falta investigar el pacto de Chivoló

En días pasados la Senadora del Partido de la U Gina Parody le pidió a la Fiscalía General de La Nación más celeridad en las investigaciones de quienes han

renunciado a su curul y mayor compromiso en las averiguaciones en el denominado Acuerdo de Chivoló, establecido en el año 2000 entre los paramilitares que operaban en el departamento del Magdalena y 410 políticos.

Según la información que existe en el momento, este fue el primer acuerdo que hizo entre políticos y paramilitares. Dicho pacto se celebró en septiembre del año 2000, época electoral para mandatarios regionales. En dicha cita se convendría quien iba a ser el candidato de Jorge 40. En la baraja se encontraban los nombres de José Domingo Ávila y Alfredo Ordoñez, contienda de la que Dávila resultó como ganador, en una elección que contó con un total de 410 votos.

La Corte Suprema de Justicia anexo este documento encontrado en uno de los allanamientos que la Fiscalía hizo en un predio rural del ex jefe paramilitar Jorge 40, al expediente de la Parapolítica. En dicho documento queda claro que muchos de los firmantes lograron acceder a los cargos de alcaldes, diputados y concejales, gracias a lo establecido en el Pacto.

El pacto fue suscrito por candidatos a la Alcaldía y concejo de Remolino, Salamina, Pedraza, Granada, Piñón, Sabanas de Ángel, Cerro de San Antonio, Concordia, Algarrobo, Tenerife, Zapayan, Ariguani, Pivijay y Plato.

¿Se superará el problema?

Queda Claro que la Parapolítica dará mucho de qué hablar por largo rato, pues hasta el momento la apertura de investigaciones a políticos bien sea de carácter regional o local, no se han detenido, por más que el gobierno nacional ha tratado de menguar el asunto, presionando a la justicia para que se establezcan vínculos de políticos con las Farc, y así levantar otro escándalo de iguales proporciones, sin dejar de enviar salvavidas a quienes están en las cárceles, a través de la reforma a la justicia en la que propone la doble instancia para congresistas procesados.

También es claro que en aras de limpiar a la democracia colombiana de los grupos armados al margen de la ley y el narcotráfico, es necesario un compromiso certero de la Fiscalía General de la Nación, quien parece trabajar este proceso judicial a paso de tortuga, lo que podría terminar en la preclusión de los casos por vencimiento de términos. Como también es necesario un compromiso de los partidos políticos en el momento de apoyar la aprobación de una reforma política, que permita blindar las instituciones democráticas de los alzados en armas, pues no de ser así, Colombia se verá abocada cada cuatro años, a que sus gobiernos se manchen con escándalos de distinto nivel, como viene sucediendo desde el gobierno de Ernesto Samper cuando se puso de moda el proceso 8.000, y luego hablar del pomaricazo en el cuatrienio de Andrés Pastrana, para pasar a la Parapolítica con Álvaro Uribe Vélez.

Significar para vencer: una mirada a las políticas comunicativas desde el verde oliva

Por: Camilo Andrés Tamayo Gómez. Investigador CINEP.
comunicacion@cinep.org.co

Actualmente nuestro país atraviesa momentos en los que las políticas de comunicación de los guerreros han logrado permear espacios que antes no les eran propios, especialmente en su relación con la sociedad civil. ¿Qué implicaciones a futuro conllevan estas acciones? ¿Significativamente qué está en juego? ¿Cómo ayuda esto, o no, a la resolución negociada del conflicto armado? ¿Cómo se ven afectadas las nuevas generaciones, en especial la infancia, con este nuevo esquema que se busca consolidar? En el siguiente artículo se presenta una mirada comunicativa al proceso de militarización de la vida civil en Colombia.¹

Se afirmaba en la edición pasada de *"Cien días vistos por Cinep"* que en una confrontación bélica no sólo se movilizan tropas, armamentos o elementos tecnológicos; también se ponen en marcha recursos comunicativos con la finalidad de gestionar significados en los diversos públicos que tienen que ver con la guerra: políticos, guerreros, comunidad internacional y, por supuesto, la sociedad civil. Se aseveraba también que en las confrontaciones no sólo hay máquinas de destrucción y muerte, sino también están las de "producción de sentido" que son definitivas para ganar las simpatías hacia uno u otro bando.²

Igualmente se llamaba la atención sobre los regímenes de visibilidad que se encuentran operando actualmente en el conflicto armado colombiano, que son el resultado directo de las políticas comunicativas que cada actor en pugna establece conciente, o precipitadamente, de acuerdo a las dinámicas propias del mismo. Hacerse público o invisible de acuerdo a las circunstancias, se convierte en un factor definitivo para transmitir mensajes que ayudan a posicionar al actor armado en ciertas esferas de la sociedad y en corrientes de opinión claves.

En estos últimos meses hemos sido espectadores de los golpes contundentes que las Fuerzas Armadas de Colombia le han propiciado a la guerrilla de las FARC. La ya

¹ Agradezco la colaboración de Nathalia Salamanca y Natalia Rueda para la elaboración de este escrito. Igualmente los trabajos de Juan Gonzalo Betancourt, profesor de la Universidad EAFIT de Medellín, sirvieron de guía y estímulo. A ellos mis reconocimientos. La responsabilidad de lo aquí escrito recae naturalmente en el autor.

² Tamayo, Camilo Andrés. 2008. *"Comunicación y conflicto armado: el fin no justifica a los medios"*. En: *"Cien días vistos por Cinep"* No 63 – Abril. Bogotá. Disponible en: <http://www.cinep.org.co/ciendias63.htm>

famosa “Operación Jaque”,³ que desencadenó un sinnúmero de actos comunicativos a favor del Ejército por parte de la ciudadanía, ayudó sin duda a que la movilización social del 20 de julio tuviera, por momentos, un tinte simbólico de respaldo general a las fuerzas militares y se convirtiera la marcha en el espacio ideal para respaldar la política de seguridad democrática del actual gobierno.⁴

Nadie pone en tela de juicio el enorme esfuerzo que los militares colombianos realizan día a día para combatir a los grupos alzados en armas, pero se deslumbra por momentos desplazamientos comunicativos que nos hacen reflexionar sobre varios puntos: ¿todos los mecanismos son válidos para conseguir los objetivos propuestos? ¿Es necesario realizar cualquier tipo de acción cívico-militar cuyo único objetivo sea “*ganarse el corazón de la población civil*” a como de lugar? ¿Es pertinente, en el actual clima de polarización que vive Colombia, ejecutar mecanismos de sentido que permitan afianzar el apoyo irrestricto de la sociedad civil hacia las fuerzas armadas? ¿Hasta qué punto se coopta la civilidad y se convierte en un actor vestido de verde oliva?

Una de las políticas comunicativas más interesantes de analizar es la que lleva a cabo las Fuerzas Militares desde hace años, para buscar relaciones estructurales de apoyo con la sociedad civil. Recordemos cómo en el pasado, en la gran mayoría de municipios afectados por el conflicto armado, se observaba a este actor como un estamento que iba en contravía de los intereses ciudadanos, y de ahí que dentro de la estructura militar haya cobrado más sentido la dirección de Acción Integral, dentro de la Jefatura de Operaciones del Ejército Nacional, en los últimos tiempos.⁵

Propaganda, acciones de relación con la sociedad civil, estrategias de inteligencia militar, desarrollo de políticas de comunicación con los civiles, operaciones de acercamiento con la gente, instrucciones para ganarse la confianza de los pobladores, manuales de guerra, tácticas cívico-militares, manuales de infiltración, en fin... dentro de la lógica de la guerra pareciera, por iluso que parezca aseverarlo, que a los guerreros se les olvidara que la sociedad civil es eso, civiles, y no un grupo a cooptar o ganar para sus intereses.

Se deja claro, enfáticamente, que son iguales de condenables estas acciones por parte de las Fuerzas Armadas como las que llevan a cabo los grupos guerrilleros y paramilitares. Como ya innumerables estudios lo afirman, lamentablemente siempre los que ponen los muertos en un conflicto es la sociedad civil y no los guerreros,⁶ que por duro que parezca, son los llamados naturales a los brazos de Tánatos o Ker en medio de una confrontación armada.

De la estrategia a la exaltación

Para dar inicio se quiere puntualizar un importante argumento: en medio de una confrontación bélica no hay mayor éxito de una política que su apropiación por parte del público objetivo en su vida cotidiana. La naturalización de las prácticas e imaginarios deseados por un actor de la guerra hacia su target, garantiza su

³ Consultar: “*Jaque mate: la operación perfecta*”. En: Revista Semana No. 1365 de junio de 2008. Disponible en: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=113228

⁴ Llama la atención la intervención de Shakira en el concierto efectuado en Leticia el 20 de julio, donde realiza una intervención de apoyo hacia la actual política gubernamental, que luego fue instrumentalizada en un spot publicitario por parte de las Fuerzas Armadas. Favor consultar: <http://www.youtube.com/watch?v=hyGuwEuvnN48&feature=related>

⁵ Ver Estructura Orgánica Ejército Nacional en: <http://www.ejercito.mil.co>

⁶ Sobre lo anterior consultar: Programa por la Paz - CINEP. 2003 “*La viga en el ojo. Los costos de la guerra*”. Bogotá.

sostenibilidad política, social y simbólica en el mediano plazo, condición definitiva para alcanzar la continuidad de una acción de guerra.⁷

Al tener como telón de fondo lo anterior, se observa cómo en los últimos cien días se presencia un giro en el régimen simbólico colombiano importante, a partir de eventos-sucesos de la vida cotidiana, especialmente en entornos urbanos. Para ello, se toman tres ejemplos concretos que ayudan a desnudar el impacto logrado por la política de comunicación establecida por las Fuerzas Militares que, claramente, han dado los resultados propuestos. Estos hechos son: un conocido festival gastronómico, una exposición en un centro comercial y un evento en un recinto ferial; todos ellos actos comunicativos.



Fotografías de Alimentarte 2008 y exhibición del helicóptero de la Operación Jaque en Corferias.

Fotografías tomadas de la página Web de la Fundación Corazón Verde y la edición electrónica de la página Web de El Tiempo.

El primer ejemplo ocurrió el pasado 26 y 27 de julio cuando se llevó a cabo en Bogotá la primera jornada del festival gastronómico "Alimentarte 2008", organizado por la Fundación Corazón Verde, y el cual buscaba fondos económicos de ayuda para viudas y huérfanos de policías que han muerto en combate.⁸ Como cualquier festival de comida, había puestos de diversos restaurantes, distribuidos por la totalidad del parque "El Virrey" de la capital colombiana, ubicado al norte de la ciudad.

Lo que llama la atención es que el evento central del festival, en horas de la tarde, era la presentación de la orquesta de la policía nacional, la cual durante unas horas tocó música festiva donde las líricas se destacaban por ser alusivas hacia la libertad de los secuestrados, la búsqueda de la paz, el amor hacia los símbolos patrios y la solidaridad que la ciudadanía debe tener hacia las acciones policiales. Entre salsas, vallenatos, merengues,

porros y una que otra ranchera, los mensajes fluían. Y el público aceptaba los mensajes complaciente.

Al caer la noche, y ya para cerrar la intervención de la orquesta, el presentador oficial hace saber la sorpresa de la tarde: han sido invitados a esa tarima dos de los policías rescatados en la "Operación Jaque", los cuales acto seguido dan un discurso alusivo a la grandeza de la institución a la que pertenecen y terminan cantando con el grupo musical una canción que invita a la desmovilización. El público presente se exalta, repite los coros de la canción y termina en un efusivo aplauso que dura

⁷ El mejor ejemplo de lo anterior es la apropiación cotidiana de la Política de Seguridad Democrática por parte de los colombianos y de su exitosa política comunicativa. Sobre este asunto consultar: Tamayo, Camilo Andrés. 2005. "Mañana en la batalla piensa en mí". En: "Cien días vistos por Cinep" No 57 – Junio. Bogotá. Disponible en:

<http://www.cinep.org.co/revistas/ciendias/RevistaCienDias57/lapoliticacomunicativa.pdf> y Tamayo, Camilo Andrés. 2007. "Mutaciones contemporáneas: proceso electoral y medios de comunicación en Colombia 2006" En: Se nos rompió el amor. Medios de comunicación y procesos electorales en América Latina. 2007. Fundación Friedrich Ebert Stiftung – C3. Bogotá. Disponible en: <http://www.c3fes.net>

⁸ <http://www.fundacioncorazonverde.org>

largo tiempo. La gente baila, ríe, llora y se abraza. El “amor patriótico” florece en la piel de la mayoría de los asistentes.

El segundo ejemplo transcurre en uno de los centros comerciales más famosos del país. Durante todo el mes de julio, en alusión al mes de la independencia, se realizó en alianza con las Fuerzas Militares una exposición para demostrar “el orgullo patrio” donde se efectuaron varios actos para “*hacerle sentir a las soldados de la patria lo orgullosos que estamos los colombianos de ellos*”.⁹ Exposiciones, fotografías, recorridos guiados, publicidad oficial, charlas y toda una demostración de merchandising militar hizo parte de este acto comunicativo.



Finalmente, el tercer ejemplo se concreta en el marco de la IV Feria Internacional de Logística que se llevó a cabo en Bogotá la última semana de agosto, y donde la atracción principal fue la presentación pública del Helicóptero “Libertad 1”, el MI de fabricación rusa que fue utilizado para realizar la “Operación Jaque”¹⁰. 1.500 personas en promedio visitaron el aparato, se tomaron fotos, lloraron, viajaron desde otras ciudades de Colombia sólo para observar el helicóptero y realizaron preguntas de toda índole a los militares que explicaban, paso a paso, los detalles de esta victoria militar.

Vale la pena anotar un hecho particular que enmarcaba la visita guiada “*los visitantes encontraban, sobre cada asiento, la foto de la persona que lo ocupó durante el regreso de los helicópteros a su base con los rescatados (...) ¿Dónde está Ingrid?, preguntó una mujer madura, con pinta de ejecutiva, que entró con cuatro jóvenes. El piloto le señaló el segundo puesto, junto a la puerta, y la mujer se sentó de inmediato al lado de la foto de Ingrid y se hizo tomar una foto con un celular*”¹¹.

Sobre los anteriores tres ejemplos varias consideraciones. La primera pasa por la apropiación simbólica que se empieza a manifestar por parte de la sociedad civil de “apoyo irrestricto” a las operaciones militares de las Fuerzas Armadas y a no tomar distancia crítica sobre sus acciones. En otras palabras, con este telón de fondo, ¿Cómo no ser tildado de “antipatriota” por afirmar que el uso indebido del logo de la Cruz Roja Internacional desnuda la falta de seriedad del gobierno colombiano por los acuerdos internacionales? ¿Que no todo vale en la guerra, pues por encima está el respeto a la dignidad humana sea cual sea su condición? ¿Que todo este “fanatismo verde oliva” da un golpe mortal a los procesos de negociación política, de acuerdo humanitario, de diálogo, porque se reafirma el imaginario, en la conciencia colectiva de la sociedad, de que sólo por las armas alcanzaremos la paz?

Es que es la encrucijada es muy preocupante a nivel comunicativo. No es ser facilistas y creer ingenuamente que todo esto llevará a una homogenización de la sociedad. No. Lo que realmente prende las alarmas es observar como las

⁹ Frase que acompañaba la entrega de una postal alusiva al evento. Ver la imagen de la invitación en el presente artículo.

¹⁰ “*Helicóptero de la “Operación Jaque” en el que se rescató a Ingrid se exhibe en Corferias*”. Periódico El Tiempo. Edición del 29 de agosto de 2008. Ver la nota en su versión electrónica en: <http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/2008-08-29/helicoptero-de-la-operación-jaque-en-el-que-se-rescato-a-ingrid-se-exhibe-en-corferias-4480859-1>

¹¹ Ídem.

mentalidades que se construyen en los colombianos con respecto al conflicto armado, en parte por los actos comunicativos descritos anteriormente, conlleva a la polarización, a la radicalización, al desplazamiento de la sociedad civil a lugares que no le son propios, a creer de verdad que los “héroes en Colombia si existen”¹².

La segunda consideración se encuentra en el terreno de la legitimidad de sentido¹³, por parte de la población colombiana, de futuras operaciones que claramente pueden ir en contravía del desarrollo de la democracia en nuestro país. En otras palabras, si empezamos simbólicamente a interiorizar la vida militar, se puede empezar a aceptar como “legítimo civilmente” acciones que son de exclusividad de las Fuerzas Militares.

¿Hasta qué punto no se construye un cierre comunicativo que impide la discusión, el disenso, los contrapesos? ¿Le estamos entregando las llaves a un solo actor social como medida desesperada, pues las frustraciones sociales son tan altas que hemos perdido colectivamente el valor social del diálogo? ¿Está Colombia preparada para que las Fuerzas Armadas empiecen a ocupar espacios no tradicionales como el control social, moral y simbólico de poblaciones y corrientes de opinión específicas? Las preguntas quedan abiertas para el debate.

Finalmente, la tercera consideración se ubica en dos espacios: la primera transita por lo que algunos académicos denominan “pánico moral”¹⁴ que se traduce en la positiva adopción por parte de la sociedad de medidas que atentan contra derechos civiles ganados en el tiempo, y la segunda, por un desplazamiento comunicativo que imposibilita que los actores sociales sean reconocidos desde sus características y, por ende, comiencen a realizar producciones de sentido que atentan con su lugar privilegiado dentro de su espacio social, de su razón de ser y de su validez al interior de la esfera comunitaria.

La infancia como objeto de cooptación

Para finalizar, se quiere llamar la atención sobre las acciones que se encuentran realizando actualmente las Fuerzas Armadas que tienen en la infancia a su público objetivo. Se hace referencia a programas como “Club lancita” (Ejercito), “Marco y Coral” (Armada Nacional) o “Capitán Paz” (Fuerza Aérea) que mediante juegos, actividades reales - virtuales y eventos especiales, buscan que niños y niñas colombianas se aproximen al mundo militar desde una positiva aceptación simbólica.



El caso del último Festival de Verano realizado en Bogotá es bastante significativo sobre la utilización que le está dando actualmente el ejército a estos programas. Recordemos como en el pasado las Fuerzas Armadas llevaban actos circenses a las poblaciones afectadas por el

¹² Copy utilizado en la propaganda oficial de las Fuerzas Militares Colombianas. Ver:

<http://www.youtube.com/watch?v=D9yGUAsxIHEo>

¹³ Sobre este asunto ver: Fabregas, Michel. 2008. “Comunicación y sentido en las sociedades de control”. Editorial SNM. Argentina.

¹⁴ Sobre este asunto consultar: Bonilla, Jorge Iván y Tamayo, Camilo Andrés. 2007. “Las violencias en los medios los medios en las violencias” CINEP, Universidad Javeriana, Universidad EAFIT, Colciencias. Bogotá.

conflicto armado para irse acercando “al corazón de la gente” e ir, poco a poco, ganando la confianza de sus habitantes.

Colombia hace parte de un tratado internacional que tiene como finalidad prevenir que niños y niñas sean afectados por minas antipersonales, especialmente en zonas rurales, programa que ha sido exitoso para que, por ejemplo, en el Oriente Antioqueño las víctimas infantiles por culpa de éstos artefactos haya bajado considerablemente en los últimos años.

Lo que resulta curioso es observar como se les imparte estos cursos a infantes de entornos urbanos, especialmente de Bogotá, en el marco de un festival de acceso gratuito, público y patrocinado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.



¿Hasta que punto es una acción de prevención o es realmente otra forma de publicidad para las Fuerzas Armadas? ¿Cómo impedir que las generaciones futuras de colombianos no sigan empuñando las armas si desde pequeños el “soldado amigo” le enseña a cargarlas? ¿Cómo transformar esa cultura colombiana que se basa en las acciones de hecho si siendo niños comienzan a crear un referente donde lo importante es hacer parte de un bando? ¿comunicativamente se construyen maniqueísmos mediante estas acciones? ¿Se está reclutando simbólicamente a los menores? Las preguntas quedán abiertas.

Aguar la fiesta

Por: Martha Cecilia García. Investigadora de CINEP.

Con colaboración de Ana María Joven, pasante Pontificia Universidad Javeriana.

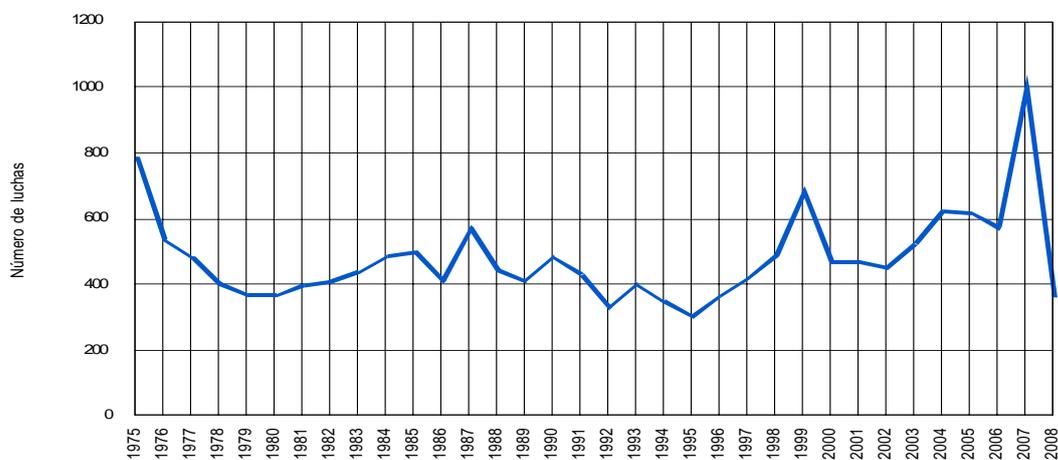
mcgarcia@cinep.org.co

“Abrir los ojos para encontrarse de golpe en la aburrida realidad”¹

EN medio de tanto regocijo nacional e internacional por las recientes manifestaciones multitudinarias en contra de las FARC y del secuestro y para derrochar alegría con la operación jaque, hablar del resto de movilizaciones sociales acaecidas en el país es aguardar la fiesta: Colombia no despertó ni el pueblo habló por primera vez el 4 de febrero o el 20 de julio de este año, y todavía está por verse si las marchas sirven, si sus ecos dejan de caer en oídos sordos, si las voces desarmadas que se expresan en todas las marchas son bienvenidas.²

Como lo muestra en la Gráfica 1,³ la movilización social en el país ha venido creciendo en los últimos años, en un porcentaje que excede el de la popularidad del actual presidente, y dobla a aquel que corresponde a quienes consideran que “Colombia es el país más feliz de América Latina”.⁴

Gráfica 1
Comportamiento de las luchas sociales en Colombia



1 de enero de 1975 - 30 de junio de 2008

¹ “La hermana de Alicia estaba sentada allí, con los ojos cerrados, y casi creyó encontrarse ella también en el País de las Maravillas. Pero sabía que le bastaba volver a abrir los ojos para encontrarse de golpe en la aburrida realidad...”. Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas*.

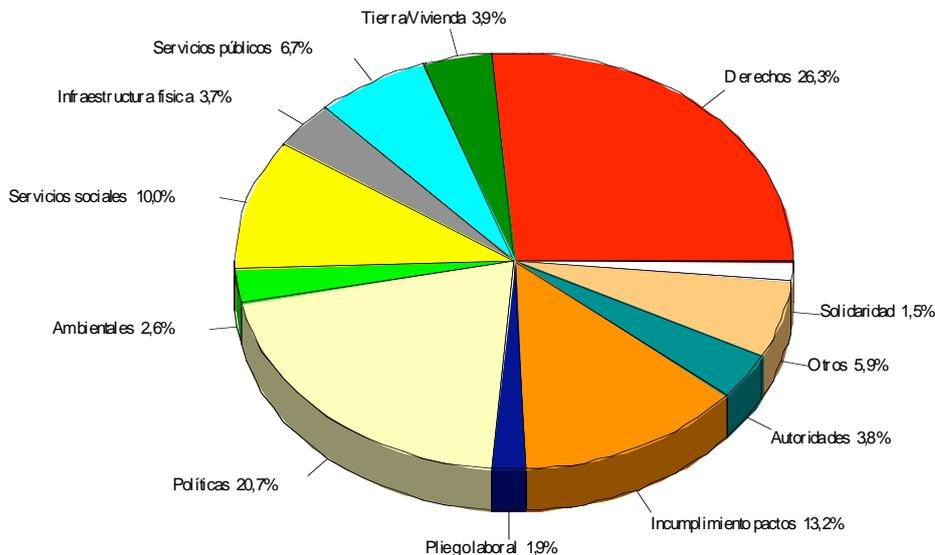
² Referencia a titulares de prensa con ocasión de aquellas dos marchas.

³ Las cifras que aquí se presentan provienen de la Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep, que se alimenta a partir de la lectura y análisis sistemático de información recolectada en periódicos nacionales y regionales, noticieros radiales y de televisión y boletines de organizaciones sociales.

⁴ Según encuesta realizada por Invamer Gallup, publicada por medios masivos de comunicación el 21 de noviembre de 2007.

En 2007 las luchas sociales alcanzaron el mayor número registrado entre 1975 y 2008 y esta efervescencia se concentra en el primer año del segundo mandato de Uribe Vélez (7 de agosto de 2006 a 6 de agosto de 2007). ¿Qué ha motivado tanta insatisfacción ciudadana en este segundo mandato recubierto de tanta euforia reeleccionista? La Gráfica 2 da algunos indicios para hallar respuestas.

Gráfica 2
Motivos de las luchas sociales en Colombia



7 de agosto de 2006 – 30 de junio de 2008

En primer lugar, la permanente lucha *contra* la violación de derechos y *por su afirmación*, abanderada por la reivindicación de los derechos a la vida, la integridad y la libertad y en protesta contra las infracciones al derecho internacional humanitario. La petición incesante hecha por las organizaciones de víctimas del conflicto armado⁵ de que muchas de ellas puedan retornar a las parcelas de las cuales fueron desterrados o de que sus familiares secuestrados o desaparecidos sean devueltos a la libertad y con vida, y puedan obtener verdad, justicia y reparación, se expresa mayoritariamente en los plantones semanales y mensuales que realizan en diversas ciudades del país, con la esperanza de ser escuchadas, tanto por los actores armados irregulares como por el gobierno nacional. En los últimos años, de la súplica han pasado a exigir un acuerdo humanitario entre las partes (gobierno-guerrilla) y han rechazado rotundamente el rescate militar, aún después de la exitosa operación jaque. A estas voces se han sumado las de pobladores urbanos, estudiantes, asalariados y mujeres. Indígenas y campesinos han denunciado continuamente, durante los últimos 23 meses, asesinatos, torturas, desapariciones de compañeros y vecinos acusados de pertenecer a la guerrilla, tras acciones militares en cercanías a sus lugares de habitación y han protestado por el confinamiento y otras violaciones de sus derechos en razón de la dinámica de la guerra.

La exigencia por el respeto a los derechos civiles y políticos ha sido una demanda de diversos sectores sociales, pero cabe resaltar que los reclusos siguen exigiendo

⁵ Su composición es fundamentalmente femenina y han venido aumentando en número y en capacidad de expresión pública, hasta liderar el 21% de las luchas del periodo observado, no obstante la persecución, y las burlas que han sufrido en sus exigencias.

la protección de aquellos derechos que no pueden inculcarse ni siquiera en situaciones de privación de libertad. La mejora de las condiciones carcelarias, el derecho a recibir atención médica, al debido proceso y a la igualdad frente a algunos beneficios concedidos a guerrilleros y paramilitares han estado entre las peticiones hechas por quienes permanecen detenidos en centros penitenciarios del país.

Indígenas, afrocolombianos y raizales han sido los principales protagonistas de las luchas sociales en las cuales se ha exigido reconocimiento, respeto y protección a sus autoridades y formas de autogobierno tradicionales, a sus concepciones y prácticas de salud, educación y justicia propias, a sus territorios ancestrales, todos los cuales han sido desconocidos, cuando no negados, tanto por medidas legislativas –como la Ley Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural–, como por proyectos agroindustriales, hidroeléctricos o energéticos emprendidos o propuestos por el gobierno nacional, empresas nacionales y multinacionales en sus territorios, sin consulta previa y en desmedro de sus condiciones culturales, económicas y ambientales.

El derecho a la organización sindical y a la huelga, así como el castigo a quienes apoyan, financian y realizan acciones en contra de la vida y las actividades de los asalariados han sido reivindicaciones centrales en las protestas encabezadas por organizaciones sindicales que, contra la idea de que han perdido vigencia, lideraron el 29% de las luchas de este segundo gobierno de Uribe Vélez.

Entre los derechos colectivos, el derecho a la paz es central⁶ pero el derecho a no ser discriminados como colectivo social es motivo de movilización y denuncia permanente de mujeres, del sector LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) y de grupos étnicos. Los dos primeros rechazan que se les convierta en objeto sexual u objetivo militar y los afrocolombianos siguen denunciando la segregación racial y la violencia simbólica cotidiana ejercida contra ellos.⁷

El segundo motivo de protesta ciudadana lo ocupan las políticas, entre las que se destacan las referidas a aspectos del manejo gubernamental del conflicto armado interno: la preponderancia otorgada al rescate militar de los secuestros sobre el acuerdo humanitario, el desconocimiento de la tragedia de los desaparecidos y de sus familiares, la segregación e invisibilidad con que se marca a la población en

⁶ Más en Colombia que, si nos atenemos al Índice Global de Paz 2008, es el país más violento de América Latina y el décimo que ostenta tal categoría en el mundo (*Radio Santafé*, 21 de mayo de 2008).

⁷ Unos pocos ejemplos para ilustrar que la “pureza de raza” sigue siendo central en la jerarquización social en el país: “Racismo en discotecas? Bares se defienden: ‘Porque devolvemos una vez en un año a cuatro negros hay una denuncia’”, titular en *El Tiempo*, 18 de mayo de 2008, págs. 2-4. “[El tal Tino Asprilla] **de ser un negrito superado y simpaticón**, querido y alabado por su pueblo pasó a convertirse en una pesadilla moral y social...”, *El Espectador*, 18 de julio de 2008, pág. 30. Junto a esta columna, apareció otra, que señala: “...‘Ah, como yo no creo en los computadores de Raúl Reyes’ –dice [la senadora Piedad Córdoba] para darse aliento–. **Su raciocinio es mero realismo mágico (...) Puro y simple pensamiento salvaje**, como lo registró Claude Lévi-Strauss. Para ella, la realidad es prolongación o tentáculo o reflejo de su pensamiento, no al revés...”. Mis negrillas llaman la atención sobre el lenguaje racista y sexista que se utiliza como soporte argumentativo de diversos temas, o como base de un tipo de humor de doble sentido que, como lo criticó el Secretario de Cultura de Medellín, se **burla de mujeres, homosexuales o discapacitados**. La polémica desatada recientemente por este funcionario en el evento Humor City de Medellín, se ha desentendido del núcleo central de la crítica: la existencia de un humor facilista que ridiculiza a ciertos sectores sociales y desconoce la violencia simbólica que ello acarrea.

situación de desplazamiento⁸ –en contraste con los beneficios otorgados a los desmovilizados–; las detenciones masivas arbitrarias y el confinamiento al que están sometidas comunidades enteras en zonas de conflicto.

Las movilizaciones más concurridas y de mayor cobertura nacional contra políticas se dieron alrededor del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, *Estado Comunitario: Desarrollo para Todos*. Ellas mostraron que muchos sectores sociales no creen que este plan sea ‘el instrumento idóneo para lograr un desarrollo sostenible que beneficie a todos’ ni que ‘el Estado Comunitario garantice que la función del patrimonio público sea el servicio a la comunidad’ –menos aún cuando crecen las protestas en contra de la privatización del patrimonio público vendido a particulares o a transnacionales–, y se oponen a que el Estado deje en manos del sector privado la tarea de generar riqueza. Este plan y el proyecto de Ley de Transferencias, percibida como el recorte a la inversión en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, mantuvieron a trabajadores estatales, estudiantes, indígenas y campesinos en una constante movilización entre marzo y mayo de 2007. Este ciclo de protestas trajo a un primer plano a las renovadas organizaciones estudiantiles y sus alianzas con sindicatos de trabajadores y profesores que denunciaron las graves amenazas, contenidas en el Plan, contra la estabilidad financiera de las universidades públicas y la calidad académica de la educación superior en su conjunto.

Por su número, las protestas contra el incumplimiento pactos ocupa el tercer lugar en este período. Entre ellas sobresalen las que piden pago de salarios y prestaciones retrasadas, en su mayoría dirigidas contra entidades gubernamentales que se muestran como las mayores acreedoras ante sus trabajadores activos y pensionados. La continua violación de promesas y acuerdos gubernamentales son otro motor de protesta de quienes son defraudados. La toma del Parque de la 93 en Bogotá por desplazados, a mediados de junio de 2008, el segundo paro de camioneros de 2008, mítines y disturbios protagonizados por desmovilizados a lo largo del periodo observado, la campaña de liberación de la madre tierra emprendida por indígenas del Cauca,⁹ entre otros muchos casos, ponen en evidencia que, desde el presidente¹⁰ hacia abajo, los funcionarios gubernamentales violan permanentemente los acuerdos a los que se comprometen y, de otra parte, que en la memoria de organizaciones y actores sociales reposa la conciencia del incumplimiento estatal de sus obligaciones pendientes por lo que, buena parte de sus acciones colectivas, reclaman al Estado que no solo sea el veedor de la equidad –como reza en el PND 2006-2010– sino el garante del bienestar social.

⁸ Recuérdese el caso Carimagua frente al cual, una senadora liberal señaló que el gobierno o había sido irresponsable, al haberlo presentado oficialmente en 2004 ante empresarios japoneses en Tokio como una alternativa de desarrollo agroecológico para la Orinoquia, o un gran mentiroso, porque en febrero de 2008, el Ministro de Agricultura dijo que sus tierras no eran aptas para desplazados porque requerían una inmensa inversión que el Gobierno no podía hacer (“Carimagua: una dolorosa señal”, columna de la senadora Cecilia López Montaña, consultada en abc.senado.gov.co). Otras muestras de invisibilidad: el 4 de agosto de 2008, *Caracol Noticias* informó que al gobierno nacional se le habían perdido un millón de desplazados para incorporarlos al programa Familias en Acción y días antes el (ex)canciller Fernando Araújo había sentenciado que “el desplazamiento no se puede medir”, *El Espectador*, 19 de junio de 2008, pág. 7.

⁹ “El 11 de junio de 2008 el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que las comunidades indígenas son penetradas por las Farc” (*elpais.com.co*, 14 de junio de 2008). “Ejército asegura que tras acciones nativas catalogadas como resistencia civil se esconde una peligrosa alianza con las Farc (*El País*, 8 de junio de 2008, pág. 14).

¹⁰ En la noche del 16 de junio –cuando se llevó a cabo el primer paro camionero del año–, el propio presidente y los ministros de transporte y hacienda llegaron a algunos acuerdos con la ACC, los mismos que fueron incumplidos y ocasionaron el paro de agosto de 2008.

Una cuarta parte de las luchas sociales del segundo gobierno del presidente Uribe exigen de las autoridades nacionales, departamentales y municipales la satisfacción de necesidades referidas a condiciones de vida y hábitat dignos, es decir, demandan servicios sociales, tierra y vivienda, infraestructura física, servicios públicos y ambiente sano. El Plan Plurianual de Inversiones del actual PND dice destinar el 57,4% de sus recursos a los sectores de ambiente, vivienda y desarrollo (9,0%), educación (19,9%), protección social (19,0%) y transporte (9,5%).¹¹ Loable propuesta borrada de un plumazo con la insistencia presidencial de gastarse el presupuesto del país pagando recompensas.¹²

Buena parte de las protestas contra diversas autoridades denuncia la corrupción de funcionarios públicos, lo que deja al descubierto la vacuidad del discurso oficial sobre la transparencia en la administración pública.

Si unos cuantos creen vivir en el País de las Maravillas de José Obdulio,¹³ donde no hay conflicto armado, pero sí un posconflicto, donde no hay rastros de paramilitarismo (en lo que le cabría algo de razón al asesor presidencial tras la extradición de los jefes) y las águilas negras son una invención de unos cuantos que se autoamenazan, donde no hay desplazados sino migrantes y donde el genocidio de la UP fue otro invento de unas supuestas víctimas y sus abogados para ganarse cuantiosas sumas de dólares, los indicios que tenemos sobre los motivos de la protesta ciudadana en el país muestran que gentes del común denuncian colectivamente y en el espacio público injusticias, insatisfacciones y desacuerdos y mantienen abiertos los ojos porque se encuentran a diario en la *aburrida* realidad.

¹¹ Libardo Sarmiento, "El financiamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007–2010", en *Caja de Herramientas*, N° 121, Bogotá, marzo de 2007.

¹² Afirmación hecha por Uribe Vélez durante un consejo comunal en Morelia, Caquetá (*El Espectador*, 15 de julio de 2008, pág. 27).

¹³ Ver "El país según José Obdulio" en *Cambio*, N° 798, 14 a 20 de agosto de 2008, págs. 18 a 23.

Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Por ahora, ni el cuero...

Por: Camilo Borrero García. Abogado, Investigador CINEP. Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia.

cborrero@cinep.org.co

La construcción de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (PNADHDIH) es una antigua aspiración y exigencia de las Plataformas de Derechos Humanos en el país. Incluso, fue formulada con anterioridad a la Declaración de Viena de 1993, que recomienda a los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptar dicho instrumento.

Adicionalmente, dadas las características de las violaciones a derechos humanos en Colombia, en su carácter de sistemáticas y masivas, ha sido una recomendación reiterada de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), y el mismo Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de dicha institución formuló esta recomendación, acotándole la necesidad de concertar ampliamente el Plan con la sociedad civil.

Con la actual administración del presidente Uribe se ha intentado durante cuatro años avanzar en dicha dirección, gracias a la mediación de la comunidad internacional y la OACNUDH. Ello no obstante, y aún registrándose algunos avances procedimentales en el camino, se está lejos de cumplir el cometido. Así, aunque el Gobierno anuncia en escenarios internacionales como inminente la adopción del Plan, por ahora ni siquiera se le ve el cuero. Por lo menos, en el entendido de que éste sea un instrumento elaborado conjuntamente entre la sociedad civil y el Estado.

Lo avanzado hasta el momento

El primer logro del proceso de concertación del Plan es su carácter inclusivo. Se alude con ello al hecho de ir vinculando progresivamente más y más actores, tanto del orden estatal como ciudadano. En un comienzo, las deliberaciones se hacían entre representantes de tres Plataformas de Derechos Humanos (La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación al Desarrollo y la Plataforma Colombiana de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y Desarrollo), el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y la OACNUDH.

Hoy, además de los anteriores, hacen parte de las instancias de planeación operativa y procedimental cuatro Ministerios (Del Interior y Justicia, Protección Social, Defensa y De Relaciones Exteriores), la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones del llamado Consenso de Cartagena (Secretariado Nacional de Pastoral Social, Consejo Gremial, Confederación de ONG, Sistema de Planeación Nacional, Federación Nacional de Municipios, Fundación Restrepo Barco y la Alianza) y representantes de 11 sectores con agendas en derechos humanos (Mujeres, Afrodescendientes, Campesinos, Jóvenes, Comunales, Desplazados, Víctimas de violaciones a los derechos humanos, Ambientalistas, Niñez,

Movimientos de Paz y LGBT). Se ha ampliado el acompañamiento internacional con la presencia continua de las Embajadas de España y Suecia, el PNUD (quien ejerce la Secretaría Técnica del proceso) y las Plataformas de ONG internacionales (Dial y Poded). Otros sectores sociales están definiendo su representación (sindicalismo, cultural, educativo, cooperativo y víctimas de DIH), mientras que algunos, como el caso del movimiento indígena, han delimitado por ahora su rol al de observadores del proceso.

Así, aunque el Gobierno anuncia en escenarios internacionales como inminente la adopción del Plan, por ahora ni siquiera se le ve el cuero. Por lo menos, en el entendido de que éste sea un instrumento elaborado conjuntamente entre la sociedad civil y el Estado.

A mediano plazo, la intención es que del Plan participe de manera activa y propositiva la sociedad colombiana en su más amplia expresión, vinculando todo tipo de expresiones de ciudadanía y servicio público que tengan relación con la vigencia efectiva de los derechos humanos en el país.

Un segundo logro tiene que ver con la perspectiva desde la cual se acordó elaborar el Plan. A diferencia de otros países, en donde la concertación con la sociedad civil supuso más bien un proceso de consulta sobre un documento sometido a su consideración o bien por el respectivo Gobierno (Perú) o por un tercero como Naciones Unidas (México), en Colombia se ha propuesto una construcción desde lo regional, a través de Foros Departamentales, para concluir en un Foro Nacional amplio que adopte el Plan.

La idea es que para esta labor se cuente con algunos insumos básicos: un diagnóstico situacional sobre los derechos humanos y el DIH en Colombia - formulado a través de las Recomendaciones, Jurisprudencia y Relatorías Especiales de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos -, un documento del Gobierno Nacional sobre lo que deben ser los contenidos del Plan desde su perspectiva, y un documento de las Plataformas de Derechos Humanos y Sectores Sociales con el mismo carácter. Pero estos tres insumos son sólo indicativos, pues lo realmente determinante sería la deliberación amplia e incluyente de entidades del Estado y sociedad civil desde lo local hacia lo nacional. El tercer aspecto positivo tiene que ver con el ánimo que inspira toda esta actividad: la elaboración de un instrumento de Estado, no de Gobierno, que tenga una vigencia relativamente amplia en el tiempo (se habla de un Plan para unos 12 a 15 años) y de carácter vinculante. Aun cuando todavía no hay acuerdo pleno en los mecanismos jurídicos que posibiliten lo anterior, lo cierto es que en buena medida el acompañamiento de la Comunidad Internacional tiene por objeto vigilar que este ánimo se concrete, y a ello se ha comprometido la actual Administración.

¿Obstáculo insalvable?

A pesar de lo anterior, en la actualidad el proceso se encuentra congelado por un obstáculo de marca mayor: las garantías que se esperan del Estado para una participación adecuada de la sociedad civil en la concertación.

Por supuesto que en un país azotado por un conflicto armado interno en que las principales víctimas han sido de la sociedad civil inerme, hablar de garantías siempre comporta algo de utopía, especialmente en lo que atañe al comportamiento de los combatientes en lo que a respeto del Derecho Internacional Humanitario les compete. Pero el énfasis de los diferentes representantes de la

sociedad civil ha tenido un derrotero preciso: la legitimidad del trabajo en derechos humanos.

Y es que, aun cuando resulte paradójico, es el mismo Gobierno, a través del más alto nivel, el Presidente Uribe y sus Ministros, el que se ha caracterizado por socavar dicha legitimidad. Y, en esas condiciones, hablar de un Plan concertado en materia de derechos humanos resulta algo más retórico que real.

No hay que olvidar que la primera *rabieta* presidencial para descalificar instituciones que no le sean afines a su política de gobierno fue, precisamente, contra las organizaciones defensoras de derechos humanos, a quien en su momento tildó de “organizaciones politiqueras que están al servicio del terrorismo y que esconden sus ideas políticas detrás del discurso de los derechos humanos”¹.

Más recientemente, a raíz de una controversia con el reconocido vocero de algunas organizaciones de víctimas de crímenes de Estado, Iván, Cepeda, el Presidente solicitó: “les pido a aquellos que tanto los secundan en la comunidad internacional, a que antes de compadecerse por las lágrimas de cocodrilo de estos farsantes de los derechos humanos, vengan a ver qué es lo que está pasando en Colombia: un país que está resueltamente progresando en pluralismo, en transparencia, en seguridad, en confianza inversionista”².

A mediano plazo, la intención es que del Plan participe de manera activa y propositiva la sociedad colombiana en su más amplia expresión, vinculando todo tipo de expresiones de ciudadanía y servicio público que tengan relación con la vigencia efectiva de los derechos humanos en el país.

Palabras que no pueden ser analizadas por fuera del contexto nacional del momento, polarizado por las marchas del 4 de febrero y el 6 de marzo. En ese clima proclive a las acusaciones, el Gobierno no dudó en atribuir al trabajo de las ONG de derechos humanos descalabros internacionales como los que se vivieron con el congelamiento del TLC con Estados Unidos y la preocupación por el desmesurado aumento de los falsos positivos. Incluso, en un foro en Madrid, el ministro del interior y justicia, Carlos Holguín, afirmó que estas instituciones hacían pasar a guerrilleros muertos en combate como civiles³.

Esta serie de pronunciamientos, a lo que habría que adicionar una nueva cadena de amenazas de grupos paramilitares, como los de las Águilas Negras, en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, llevó a que la Instancia de Coordinación del proceso de construcción del Plan, en su reunión de abril de 2008, decretara una suspensión del mismo hasta tanto se llevara a cabo una reunión de alto perfil durante la cual el Gobierno no sólo ratificara la condición de interlocutores válidos de los representantes de la sociedad civil, sino que se comprometiera con un conjunto de garantías para asegurar su participación, empezando por las más evidentes: las que constitucionalmente deben brindar el Presidente y sus Ministros.

¹ Septiembre 10 de 2003. Al respecto, por ejemplo, ver <http://indh.pnud.org.co/articulo/mprimir.plx?id=159&t=informePrensa>.

² Mayo 6 de 2008. Palabras del presidente Álvaro Uribe al inaugurar el Terminal de Transporte de Montería. Ver http://web.presidencia.gov.co/discursos/discursos2008/mayo/terminal_06052008.html

³ Cfr., por ejemplo, El Espectador, <http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-ongs-y-gobierno-agarrados-ley-de-justicia-y-paz>, noviembre 15 de 2007.

Los escenarios futuros

Han transcurrido más de cuatro meses sin que se haya logrado llevar a cabo la reunión de alto perfil que condiciona la continuidad del proceso. Según palabras del Vicepresidente de la República, existe el interés del Gobierno por propiciar este espacio y ratificar sus compromisos por construir el Plan de manera concertada. Sin embargo, según el mismo Gobierno, problemas de agenda han impedido concretar el mismo.

Las Plataformas de Derechos Humanos y voceros de algunos de los sectores sociales son menos optimistas. A su juicio, no basta con hacer un encuentro, así éste cuente con personalidades de las más altas esferas estatales. Lo que se requiere es un compromiso político cierto y verificable de respaldo a la legítima labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente a nivel regional. El que podría expresarse en una directiva presidencial o en un pronunciamiento público de una difusión mayor a la que se produce cuando han sobrevenido ataques desde el Ejecutivo en contra de su trabajo.

Incluso, algunas organizaciones de derechos humanos consideran que, con el destape de la parapolítica y sus efectos en aspectos como el trámite de reforma constitucional que posibilitó la reelección presidencial, no debe adelantarse un proceso de concertación con el actual Gobierno, pues éste ha perdido ya su legitimidad.

En estas condiciones, la continuidad de lo hasta ahora adelantado está en veremos. En buena medida, dependerá de la diligencia que ponga el Gobierno en posibilitar que se pueda avanzar efectivamente en un Plan de Estado, incluyente desde lo regional y sectorial y con perspectiva de género, rodeando al mismo tiempo de garantías políticas a los actores intervinientes. Pero, de similar manera, el movimiento de derechos humanos deberá concretar los contenidos estratégicos que, desde su perspectiva, debe contener un Plan de Acción en estas materias para Colombia, y lograr posicionarlos ante la ciudadanía de manera amplia y concertada.

Crisis alimentaria en Colombia. La pregunta no es si existe, sino desde cuando.

Por: Javier Lautaro Medina. Investigador de CINEP. Abogado Universidad Nacional de Colombia.

cinepdesc@cene.org.co

En el último año se prendieron las alarmas por los posibles impactos que la crisis mundial de alimentos tendría sobre Colombia. El principal interrogante es si el país está preparado para afrontar las dificultades que se presentan a nivel global en cuanto a la producción y comercialización de alimentos, y el acceso de las personas a una alimentación adecuada que les garantice un aceptable grado de seguridad presente y futura, que contribuya a la realización de su derecho a la alimentación y al disfrute de una vida digna.

Las explicaciones sobre la crisis mundial están dentro de un amplio espectro: alza de los costos del petróleo que incrementa los precios del transporte y los insumos; cambio climático e inundaciones y sequías que amenazan la disponibilidad regional y mundial de alimentos; aumento de los precios de los alimentos; auge de los agrocombustibles; recesión económica en los Estados Unidos; y aumento de la población y por consiguiente de la demanda de alimentos, especialmente en China e India¹. Al parecer cada uno de estos elementos contribuye a configurar una situación problemática en la que no se avizora una solución a corto y mediano plazo.

La respuesta institucional a la pregunta sobre la crisis y sus repercusiones en el país asume que tenemos una suerte de "blindaje" frente al llamado "tsunami silencioso", gracias a la autosuficiencia alimentaria del 90% que tenemos, y que se debe al crecimiento agropecuario y al aumento de la productividad en el campo en los últimos años². Sin embargo, un análisis desde una perspectiva integral sobre la alimentación y el derecho humano a la alimentación adecuada muestra que no sólo estamos siendo afectados por la situación mundial, sino que además tenemos nuestra propia crisis estructural en la materia, y que una y otra se complementan hasta generar un panorama poco alentador para la población colombiana.

La perspectiva que adoptamos para el análisis involucra diversos aspectos relativos al acceso, para todas las personas, a alimentos suficientes, sanos y culturalmente adecuados, que tiene una relación directa con la pobreza, el acceso y usufructo de recursos y derechos como el trabajo, la tierra y el territorio, el agua potable, y la existencia de políticas e instituciones apropiadas que promuevan las

¹ Sobre la crisis mundial de alimentos ver artículo de Juan Carlos Morales en este mismo número de Cien Días Vistos por CINEP.

² "El debate del etanol no aplica para Colombia": Arias, en El País, Abril 27 de 2008.

transformaciones sociales, económicas y culturales del caso³. A continuación presentamos algunos elementos que nos permiten sostener que la crisis alimentaria en Colombia antecede al reciente debate sobre los alimentos en el mundo.

En el año 2005 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó la *Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia 2005*, primera de este tipo que se realiza en el país. La evaluación sobre la seguridad alimentaria para los hogares colombianos arrojó como resultado que en el 40,8% de ellos prevalece la inseguridad alimentaria (ICBF, 2006: 323), con mayor incidencia en los estratos bajos de la población, en los hogares encabezados por mujeres y en las áreas rurales. Entre las razones que explican dicha situación se encuentran (i) la pobreza y (ii) el desplazamiento forzado producto del conflicto armado (327-329).

Un análisis desde una perspectiva integral sobre la alimentación y el derecho humano a la alimentación adecuada muestra que no sólo estamos siendo afectados por la situación mundial, sino que además tenemos nuestra propia crisis estructural en la materia

(i) De acuerdo al Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID de la Universidad Nacional, de 1991 a 2005 la pobreza en Colombia se incrementó en 4 millones de personas, llegando a una cifra de 22,2 millones de pobres (2006: 50); más allá del consabido “debate de las cifras” sobre el papel del gobierno actual en la superación de la pobreza por el camino estadístico, la situación es crítica, quiere decir ello que más o menos la mitad de los colombianos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

Aunque la pobreza es un fenómeno económico, se refleja en el ámbito político, social y cultural, teniendo como resultado baja productividad del trabajo, poca valoración de la fuerza de trabajo, escasa cobertura de los servicios del Estado, mínima valoración de los productos elaborados y transados por los pobres y acceso limitado a conocimientos relevantes para participar en la sociedad (Angulo, 1996: 51). Otras consecuencias físicas de no acceder a los alimentos suficientes se relacionan con el ejercicio de otros derechos: bajo rendimiento escolar, desnutrición y enfermedad (ICBF, 2006: 331).

Es indiscutible el crecimiento económico que Colombia ha tenido en los últimos años, no obstante, este por sí solo no garantiza necesariamente mayor distribución de la riqueza y posibilidades de acceso a recursos que garanticen las necesidades básicas de los estratos más bajos de la población. Siguiendo a Bonilla (2007: 81) el crecimiento que se está dando en nuestro país no crea el empleo requerido y el poco generado es precario en cuanto a sus condiciones laborales, lo que se expresa en una lenta reducción de la pobreza. Razón de más para argumentar la existencia de una crisis alimentaria en gran parte de los hogares colombianos que no se relaciona necesariamente con la crisis alimentaria mundial y que tiene sus efectos más desastrosos en las familias campesinas, indígenas y afrodescendientes.

(ii) Según datos de CODHES en el primer trimestre de 2008 se produjo un incremento del 18% en el desplazamiento forzado frente al mismo trimestre del

³ En este sentido la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) promovió las Directrices Voluntarias que son un extenso desarrollo de las políticas que deben adoptar los Estados para garantizar el derecho a la Alimentación.

2007⁴. Las razones que muestra el estudio⁵ señalan que el conflicto social y armado persiste con sus consecuencias.⁶ Para el caso de la alimentación son principalmente dos: en primer lugar, el incremento de la población en barrios marginales de las ciudades o municipios receptores agudizando los problemas sociales existentes y reproduciendo la pobreza, lo que genera una alta dosis de inseguridad alimentaria. Para el 2003, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos constató que del total de desplazados en Colombia 41% tenía una vulnerabilidad alta y 42% una vulnerabilidad media (2003: 15). Y la situación no mejora, a finales del 2007, en la aplicación de un instrumento de evaluación, se constató que del total de personas inscritas en el *Registro Único de Población Desplazada* un 59.1% presentó síntomas de alimentación insuficiente la semana anterior a la encuesta (Comisión de Seguimiento, 2008: 88)⁷. Una segunda consecuencia es el rompimiento del tejido social campesino y la pérdida de las ocupaciones agrícolas, que permitía, por medio de la producción propia o a través del empleo, que las personas y sus familias accedieran a los alimentos o los recursos para procurárselos⁸, actividades que muy pocas veces son retomadas.

Otro elemento a tener en cuenta para evaluar la situación alimentaria es el estado de la propiedad de la tierra pues como lo han reconocido múltiples instrumentos internacionales⁹ el no tener acceso a tierras y otros recursos constituye un obstáculo insalvable para la garantía del derecho a la alimentación adecuada. La tierra en Colombia está concentrada en pocas manos: el 0,43% de los propietarios posee el 62.91% de la tierra, y solamente el 86.41% de los propietarios tiene el 8.73% en lo que se conoce como pequeña propiedad (Cabrera, 2008). A ello habría que sumarle lo que se ha dado en llamar el modelo "carimagua", impulsado desde el gobierno central, que privilegia la agroindustria y las exportaciones por encima de la economía campesina y la producción de alimentos, bajo el argumento de aprovechar la alta demanda de agrocombustibles a nivel mundial, para generar empleos y ganancias aprovechando un mínimo de la tierra disponible y sin mover la frontera selvática. Este modelo ha evidenciado el favorecimiento a muy pocos grupos de poder a través del trasvase, legal o ilegal, de recursos, incluida la tierra.

Otro elemento a tener en cuenta para evaluar la situación alimentaria es el estado de la propiedad de la tierra pues como lo han reconocido múltiples instrumentos internacionales el no tener acceso a tierras y otros recursos constituye un obstáculo insalvable para la garantía del derecho a la alimentación adecuada.

⁴ Disponible en <http://www.codhes.org/images/stories/pdf/resumen.pdf>, consultada el 2 de Agosto.

⁵ "aspersiones aéreas de cultivos de uso ilícito en el marco de operativos militares, el reclutamiento forzado, la instalación de minas, la presencia de grupos paramilitares en 17 departamentos del país, los intensos combates entre el Ejército y la guerrilla de las Farc que incluyen bombardeos y uso de armas de efectos indiscriminado, así como los enfrentamientos entre las Farc y el Eln en algunas regiones del país."

⁶ De la misma forma que con los datos de pobreza, la cifra del total de desplazados está en constante debate, para ACNUR son 3.000.000, para el gobierno son 2.501.000 personas.

⁷ Encuesta aplicada en razón de los compromisos adquiridos por el gobierno a partir de la sentencia T 025 de 2004 de la Corte Constitucional..

⁸ Para ese mismo 2003 el PMA verificó que del total de desplazados el 75% de la población ocupada se concentraba en actividades agropecuarias (11).

⁹ Observación General 12 del Comité DESC de Naciones Unidas, Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición, Convenio 169 de la OIT, Directrices Voluntarias de la FAO, entre otros.

Con todo, la lógica de los agrocombustibles contiene unos elementos que es necesario escudriñar: el supuesto aporte ecológico sin tener en cuenta los costos ambientales de su producción sobre la tierra, el agua y los ecosistemas así como la poca competitividad colombiana frente a otros países; pero fundamentalmente el costo social intrínseco relacionado con la implementación de dicho modelo basado en el desplazamiento de comunidades enteras, por ejemplo en el Pacífico, y la transformación completa de la vocación de la tierra y sus legítimos propietarios, eliminando la agricultura de pan coger y buscando cambiar campesinos por obreros.

Por supuesto las consecuencias trascienden del ámbito rural al urbano, pues los pobladores de las ciudades, especialmente los más pobres, son afectados por el encarecimiento de los alimentos, lo que sucede de dos formas. La primera, con los incentivos propuestos desde el gobierno para los cultivos de tardío rendimiento para apoyar esta "bonanza", se genera una competencia entre las tierras para agrocombustibles y las tierras para los alimentos¹⁰, incrementándose el precio de estos últimos. La segunda tiene que ver con el uso final que se le da a los alimentos producidos (maíz y la soya, por ejemplo) que terminan destinados para agrocombustibles, afectando la disponibilidad interna e incrementando en consecuencia su precio en el mercado alimentario.

A manera de conclusión cabe decir que las posibles definiciones de crisis apuntan principalmente a tres aspectos: (i) una transformación significativa o brusca de un escenario, (ii) una situación complicada y (iii) escasez o carestía de un bien. Para el tema alimentario, como lo vimos, todas son aplicables al caso colombiano. Ahora bien, una política pública coherente con los derechos humanos asumiría que en materia de alimentación la existencia de una persona con inseguridad alimentaria ya es una situación en extremo violatoria de la dignidad humana que requiere el accionar inmediato de los poderes públicos y la sociedad entera para eliminar dicha vulneración.

Así como la crisis mundial no es novedosa, pues obedece a la lógica inequitativa de los países desarrollados hacia la periferia de los circuitos económicos mundiales y hacia algunos de sus propios pobladores (en la que se han buscado excusas como las mencionadas en el primer párrafo de este artículo), la crisis colombiana tampoco es reciente como consecuencia de los modelos que impiden que la gran mayoría de personas accedan a los recursos suficientes para garantizar su alimentación adecuada. Como evidencia el título de este artículo, la pregunta central que debemos hacernos sobre Colombia no es si estamos preparados o no frente a la crisis alimentaria mundial, sino si existe conciencia y conocimiento sobre las reales dimensiones de nuestra propia crisis.

Una política integral en esta materia debe apuntar a generar las condiciones para que las personas puedan establecer relaciones dignas con los alimentos y con los medios para acceder a ellos, mucho más que programas asistenciales de entrega de alimentos. La forma de hacerlo parte del reconocimiento legal a la alimentación como un derecho humano (incluyendo mecanismos de reclamación), y continúa con políticas adecuadas que eliminen el desempleo y la pobreza. Además, se debe incrementar el acceso a tierras, agua potable y saneamiento básico, garantizar la disponibilidad interna de los alimentos sin extrema dependencia de otros países, asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos, promover el consumo saludable, y

¹⁰ En abril de este año, los arroceros denunciaron que el auge de estas siembras contribuyó a disminuir el área sembrada de arroz, que es uno de los alimentos básicos de los colombianos. "Biocombustibles desplazan a los cultivos de arroz", en el Nuevo Siglo, Abril 24 de 2008.

respetar los hábitos culturales propios de las comunidades e individuos en su dieta alimentaria. En principio, como se ha expresado aquí, no existe una política de estado que propugne por la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada, sustentada en la soberanía alimentaria. Mientras esto no cambie, estaremos avocados a sufrir de crisis alimentaria independientemente de lo que suceda en el resto del mundo.

Referencias

ANGULO, Alejandro, 1996, *Ética, Solidaridad, Ecología. De la posibilidad a la probabilidad del desarrollo*, CINEP, Bogotá.

BONILLA, Ricardo, 2007, Crecimiento, empleo, seguridad social y pobreza en *Bienestar y macroeconomía 2007, más allá de la retórica*, Universidad Nacional de Colombia – CID, Bogotá.

CABRERA, Linda María, *La concentración de la tierra en Colombia: entre la exclusión social y la violencia*, mimeo.

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO, 2006, *Bien-estar y macroeconomía 2002/2006. Crecimiento insuficiente, inequitativo e insostenible*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO, 2008, *Proceso nacional de verificación de los derechos de la población desplazada. Primer informe a la Corte Constitucional*, mimeo.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, 2006, *Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, 2005*, ICBF, Bogotá.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, 2003, *Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de la población desplazada por la violencia en Colombia*, WFP, Bogotá. Disponible en <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp036410.pdf>

La cuestión alimentaria en el mundo ¿crisis o continuum?

Por: Juan Carlos Morales González. Miembro de la Campaña Nacional por el Derecho a la Alimentación – Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

porderechoalimentacion@gmail.com

En los últimos meses, opacando incluso la discusión sobre el cambio climático, la denominada “crisis alimentaria mundial” (CAM) se ha convertido en el principal asunto de debate planetario. Obviamente existen lecturas disímiles de las causas que la han generado. Unas, surgidas desde los ámbitos de poder político y económico, son auto exculpatorias. Otras, provenientes de las víctimas, organizaciones y procesos sociales, insisten en que lejos de ser azarosa, la CAM era previsible, tiene unos claros responsables y unas consecuencias cuyo impacto se trata de ignorar.

Antes de continuar creemos oportuno denotar que la palabra crisis, derivada del latín “*crisis*” y a su vez del griego “*κρ σις*”, tiene según el diccionario de la Real Academia de la Lengua varias acepciones entre las que se destacan: un “cambio brusco en el curso de una enfermedad” y “momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes”. Tales definiciones, puestas en contexto con la CAM, nos permiten reflexionar sobre dos preguntas fundamentales: ¿qué de nuevo tiene la actual tragedia alimentaria?, y, ¿cuáles serán sus consecuencias?

En cuanto a la primera pregunta cabe decir que la manera cómo los medios de comunicación y el poder han presentado esta situación claramente apunta a esconder la dinámica del problema, sus responsables, las verdaderas acciones que se deberían adoptar para superar la tragedia, y el hecho irrefutable de que la actual crisis alimentaria no es un fenómeno nuevo.

Al respecto cabe recordar que en medio de un contexto en el que el sistema de Naciones Unidas secundaba la imposición de reformas estructurales en el mundo en desarrollo, en 1996 se llevó a cabo en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación en la que los Estados partes de la FAO, haciendo gala de un falso optimismo signado por la retórica neoliberal, se comprometieron a reducir a la mitad el número de hambrientos para el año 2015. No obstante, los propios hechos desmintieron a quienes afirmaban que el nuevo orden económico mundial iba a salvar al mundo del hambre y la pobreza. Tal como puede ser notado en la tabla inferior, apenas tres años después de la Cumbre las cifras del hambre revirtieron su tendencia negativa y comenzó a acrecentarse el número de hambrientos del mundo en desarrollo.

Evolución del hambre en el mundo en desarrollo. Años 1970, 1980, 1991, 1996-2002 (en millones de personas)¹.

1970	1980	1991	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
918	920.1	823.8	796.7	791.9	777.2	798.8	797.7	814.6	820.2

Si bien el último consolidado estadístico de la FAO corresponde al año 2002², la tendencia creciente del hambre, no desmentida desde entonces, deja ver que la más reciente crisis alimentaria viene dándose desde hace una década. Es decir, la presente CAM no es más que una agudización de una enfermedad social que azota al mundo y frente a la cual no se han tomado los debidos correctivos.

Siendo ampliamente reconocido que el determinante inmediato de la actual crisis es el encarecimiento de los alimentos, los países industrializados, con Estados Unidos a la cabeza, atribuyen este fenómeno a los altos precios del petróleo, a distorsiones en el mercado y trabas al modelo neoliberal, a la ocurrencia de algunos desastres naturales que han limitado la producción de alimentos en ciertos países, e, incluso, a lo que se muestra sutilmente como “voracidad” de varias naciones en desarrollo cuya falta pareciera ser haber aumentado el consumo alimentario de sus pobladores.

Tal visión del problema desafortunadamente es compartida, en términos generales, por instancias tan importantes como la ONU y varias de sus agencias, de las que se supone deberían surgir pronunciamientos más fuertes y ceñidos a la realidad. Así, muy de la mano con las grandes potencias y la banca internacional, las “soluciones” destacadas por la Cumbre de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria de la FAO (realizada en Roma del 3 al 5 de junio de este año) fueron: optimizar las relaciones comerciales entre el norte y el sur, ampliar la apertura en los países en desarrollo (neoliberalismo), mejorar y tecnificar las producciones internas de alimentos (es decir, adoptando los paquetes tecnológicos de las grandes transnacionales, incluyendo los transgénicos), y subvencionar la importación de alimentos con recursos provenientes de la “ayuda al desarrollo” (Vivas, 2008).

Como puede notarse, no hay críticas contundentes al modelo económico imperante del que las grandes potencias, la banca internacional y el poder transnacional, son sus verdaderos beneficiarios. Esta conducta explica porque en vez de pedir cuentas a los ámbitos de poder mencionados, la FAO se ha dedicado a señalar que buena parte del problema es consecuencia de que países como India, China y Brasil, estén comiendo más que antes³; como si tácitamente se quisiera inculcar la idea de que si aumenta el hambre en el mundo es, en cierta manera, culpa de los indios, chinos y brasileños.

Al tiempo en que esto ocurre, dichos ámbitos de poder tratan de matizar, no sin contradicciones, las críticas hechas en torno a cómo la dinámica de los agrocombustibles es la principal causa de la crisis. En efecto, mientras que para el gobierno de George W. Bush los agrocombustibles son responsables de no más del 3 % del incremento mundial en el precio de los alimentos, en un informe secreto del Banco Mundial, al que tuvo acceso la prensa británica en julio pasado, se

¹ Tabla tomada de Morales, 2006, 65. Datos base extraídos de los informes de la FAO “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo” de los años 2000 al 2006.

² FAO, *El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2006*, Roma, 2006.

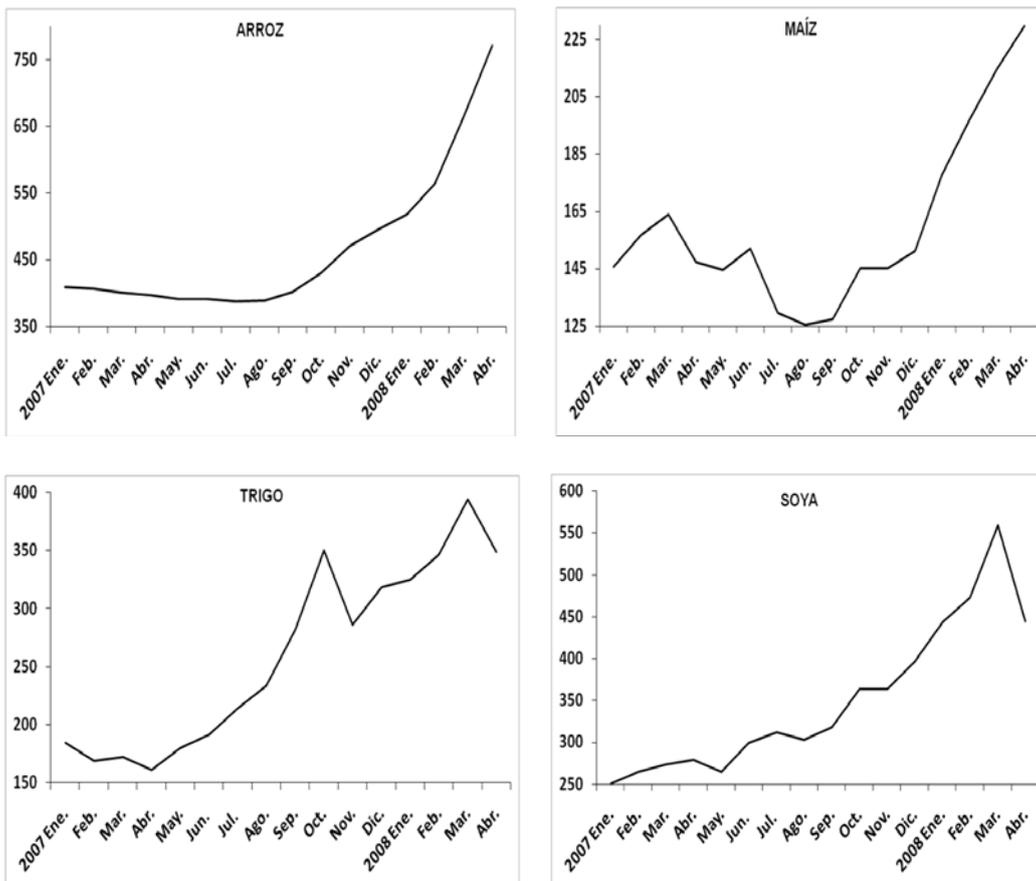
³ “En China e India ahora quieren filete”. Entrevista a José María Sumpsi, Subdirector General de la FAO, El País, Edición digital, Madrid, 21/IV/08. En: http://www.elpais.com/articulo/economia/China/India/ahora/quieren/filete/elpepieco/20080421elpepieco_1/Tes/

demostraba que aquéllos eran culpables del 75 % de dicho encarecimiento⁴. ¿Cómo entonces negar la relación causal agrocombustibles – carestía alimentaria – hambre?

Ahora bien, la actual concurrencia entre la alimentación humana y la producción de agrocarburantes (y la consecuente especulación en las bolsas y mercados internacionales), ha restringido el acceso a alimentos que son base de la dieta de buena parte de la humanidad. A medida que los alimentos son más “rentables” si se usan para la producción de combustibles, el aumento de su demanda para este fin los hace más costosos y, obviamente, los vuelve objeto de la especulación internacional alejándolos de las mesas de quienes no pueden responder económicamente a tal encarecimiento.

En las gráficas inferiores se puede apreciar cuán rápido ha subido el precio de algunos alimentos. Así, en el periodo comprendido entre enero de 2007 y abril de 2008, el precio del arroz se incrementó en un 89 % al pasar de 409 a 771.6 dólares por tonelada; el maíz aumento un 58 % (145.8 a 229.9); la soya un 77 % (251.1 a 444.9); y el trigo un 90 % (184 a 349).

Incremento en el precio mundial del arroz, trigo, maíz y soya. Enero 2007 – abril 2008 (en US/Tn)⁵



⁴ El incremento en el precio mundial de la energía y los fertilizantes sólo fueron responsables del 15 % del aumento en el precio de los alimentos. Ver: Chakraborty, 2008.

⁵ Tablas reelaboradas a partir de: “La comida sí está cara en todo el mundo”. El Tiempo, Bogotá, 26/IV/2008, Sección 3-13. Fuentes originales: Fedearroz y Chicago Board of Trade.

El encarecimiento de los cereales, tubérculos y algunas oleaginosas dispara todo un ciclo de restricciones alimentarias para quienes no pueden garantizar su acceso económico a los alimentos. En primera instancia, la concurrencia hace que estos bienes incrementen su precio a valores casi prohibitivos para el grueso de las poblaciones, limitando su acceso a fuentes energéticas de bajo costo (carbohidratos). Al mismo tiempo, como aquellos productos son materia prima para la industria alimentaria, especialmente la encargada de elaborar el pienso para el sector pecuario y avícola, los costos de producción se elevan y el acceso a la proteína animal (el otro nutriente fundamental, sobre todo en términos evolutivos) se vuelve virtualmente imposible para quienes ya tenían restricciones energéticas. Así las cosas, hay una restricción casi total a los nutrientes fundamentales para la vida.

Esto nos lleva a tratar de responder brevemente a la segunda pregunta. De entrada y recordando que el mundo ya venía presentando resultados negativos respecto al propósito de reducir el hambre, la CAM, en apenas unos pocos meses, produjo 100 millones de nuevos hambrientos⁶. Es decir, un crecimiento del 11 % respecto a las cifras de hambre que ya proyectaba la FAO para el 2007-2008 (850 millones de personas). Como esta tragedia se ha ido acompañando del impulso desmedido a los agrocombustibles (cuya dinámica se estructura sobre la apropiación de territorios con vocación campesina, destrucción de bosques y fuentes hídricas, desplazamiento y otra serie de violaciones a los derechos humanos) y el desestímulo gubernamental a la producción interna de alimentos en los países en desarrollo donde el modelo neoliberal ha sido impuesto, la capacidad de las naciones afectadas para reaccionar soberana y autónomamente a la crisis se hace imposible. En síntesis, el suministro alimentario depende de las importaciones que, a su vez, se han vuelto muy onerosas por el propio incremento en el precio de los alimentos en el mercado internacional.

Por supuesto, lo que es una tragedia social, económica y humanitaria para el grueso de nuestros países, deviene un negocio muy lucrativo para las grandes potencias y el poder corporativo asociado.

Es aquí cuando las conclusiones de la Cumbre de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria de la FAO muestran su real dimensión e intencionalidad. En efecto, al invocar una mayor apertura a los mercados se garantiza que los excedentes alimentarios del primer mundo que no sean "incinerados" en la producción de agrocombustibles, terminen ingresando fácilmente en los países del sur a precios extremadamente redituables para el gran capital. Esto, a su vez, debilita las soberanías alimentarias de los importadores e inclina aún más desfavorablemente sus balanzas comerciales.

Ahora bien, si nuestros países no tienen los recursos económicos para obtener esos alimentos, la Cumbre nos recomienda otro brebaje: ¡utilizar la ayuda al desarrollo para la compra!

Sobre el tema cabe recordar que apenas una pequeña parte de la ayuda al desarrollo se da gratuitamente y sin condiciones. En su mayoría es otorgada a cambio de la aceptación de reformas estructurales, la cesión de derechos soberanos, o en forma de préstamos blandos que ampliarán la espiral de endeudamiento y que, de todas maneras, deberán ser pagados a la misma banca

⁶ Ibid.

internacional que, muy de la mano con las transnacionales, ha sido responsable de la actual CAM⁷.

Y la tragedia no se detiene ahí. Con la vulneración del Derecho a la Alimentación, cual si de fichas de dominó se tratase, los demás derechos económicos, sociales y culturales tienden a ser irrespetados. Para el caso del derecho a la salud, por ejemplo, aquellas personas víctimas de la CAM que logren sobrevivir a su estela de muerte quedarán expuestas a toda una serie de enfermedades o minusvalías que restringirán sus posibilidades de vivir dignamente. Esto ayudará a sumergirlas aún más en la trampa de la pobreza de la que incluso muy difícilmente escaparán las generaciones venideras.

Valga concluir estas breves reflexiones recordando que la actual crisis y sus razones causales fueron anticipadamente calificadas por el ex Relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, como un "crimen contra la humanidad" (Ferret, 2007). Tal expresión pone de manifiesto, insisto, en que existen unos culpables de la misma y que como tal deberían ser juzgados como criminales; aunque sea por la historia ya que por el momento es imposible llevarlos a los tribunales internacionales.

Referencias

Chakraborty, Aditya, "*Secret Report: Biofuel Causes Food Crisis*", The Guardian edición digital, 4/VII/2008. En: <http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy>

"*En China e India ahora quieren filete*", Entrevista a José María Sumpsi, Subdirector General de la FAO, El País Edición digital, Madrid, 21/IV/08. En: http://www.elpais.com/articulo/economia/China/India/ahora/quieren/filete/elpepieco/20080421elpepieco_1/Tes/

FAO, *El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2006*, Roma, 2006.

Ferret, Grant. Biocombustibles, "un crimen". BBC Mundo edición digital, 27/X/2007. En: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7065000/7065412.stm

"*La comida sí está cara en todo el mundo*". El Tiempo, Bogotá, 26/IV/2008, Sección 3-13.

Morales González, Juan Carlos, 2006, *El hambre al servicio del neoliberalismo*, Bogotá, Ediciones desde abajo.

Vivas, Ester, 2008, "*FAO: más libre comercio, más hambre*". En: http://www.viacampesina.org/main_sp/index.php?option=com_content&task=view&id=528&Itemid=38

⁷ Sobre la utilización malévola de la ayuda al desarrollo para la generación de hambre, ver: Morales, 2006, 124-129.